



Universidad  
de Alcalá

LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR LA  
VULNERACIÓN DEL DERECHO AL HONOR  
EN REDES SOCIALES

CIVIL LIABILITY FOR THE VIOLATION OF  
THE RIGHT TO HONOUR IN THE SOCIAL  
NETWORKS

**Máster Universitario en  
Acceso a la Profesión de Abogado**

**Presentado por:**

**D<sup>a</sup> Sara Viejo Nova**

**Dirigido por:**

**Dr. D. Juan Alberto Díez Ballesteros**

**Alcalá de Henares, a 6 de febrero de 2020**

# ÍNDICE

## RESUMEN

## PALABRAS CLAVE

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
<b>2. LA RED SOCIAL, LA APARICIÓN DE LA PERSONALIDAD VIRTUAL Y LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD.....</b>	<b>3</b>
2.1. CONCEPTO DE RED SOCIAL .....	3
2.2. LAS REDES SOCIALES Y EL NACIMIENTO DE LA PERSONALIDAD VIRTUAL .....	5
2.3. LAS REDES SOCIALES Y LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD... ..	6
<b>3. DERECHOS FUNDAMENTALES EN CONFLICTO; DERECHO AL HONOR, LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN .....</b>	<b>8</b>
3.1. DERECHO AL HONOR .....	8
3.2. DERECHOS FUNDAMENTALES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN.....	13
3.2.1. CONCEPTO Y LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN .....	13
3.2.2. CONCEPTO Y LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN .....	15
3.3. PONDERACIÓN DE LOS DERECHOS EN CONFLICTO .....	16
i) Ponderación en abstracto de los derechos en conflicto .....	17
ii) El interés general de la información .....	18
iii) La condición pública o privada del ofendido .....	19

iv) La necesaria proporcionalidad de las opiniones y expresiones vertidas ..	21
v) El contexto en el que se desarrollan .....	23
<b>4. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN REDES SOCIALES POR</b>	
<b>VULNERACIONES AL DERECHO AL HONOR.....</b>	<b>25</b>
4.1. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD.....	26
4.2. LA PRESUNCIÓN DEL DAÑO EN LA LEY ORGÁNICA 1/1982 .....	27
4.2.1. LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DE LOS DAÑOS MORALES .....	28
4.2.2. CRITERIOS DE PONDERACIÓN DEL DAÑO MORAL.....	29
4.3. REQUISITO DE LA PRUEBA EN LOS DAÑOS PATRIMONIALES ....	38
<b>5. EL SUJETO RESPONSABLE .....</b>	<b>39</b>
5.1. LA RED SOCIAL COMO RESPONSABLE .....	40
5.1.1. NORMATIVA APLICABLE.....	40
5.1.2. ¿SON LAS REDES SOCIALES SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN? .....	41
5.1.3. TRATAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD EN LA DIRECTIVA 2000/31/CE Y LA LEY 34/2002.....	43
5.1.4. EL CONOCIMIENTO EFECTIVO EN LA JURISPRUDENCIA.....	46
5.2. EL USUARIO COMO RESPONSABLE .....	51
i) El usuario como autor de la publicación origen del ilícito .....	51
ii) El usuario que interactúa en la publicación .....	52
iii) El usuario no autor que comparte la publicación .....	52
iv) La responsabilidad del <i>Community Manager</i> .....	56
<b>6. CONCLUSIONES .....</b>	<b>57</b>
<b>7. BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>60</b>
<b>8. ANEXO JURISPRUDENCIAL.....</b>	<b>65</b>

## **RESUMEN**

El presente trabajo estudia la confrontación existente entre el derecho al honor y los derechos a la libertad de expresión e información como principales exponentes de las vulneraciones al derecho al honor que pueden sufrir los usuarios de las redes sociales, aunque no las únicas. En su desarrollo también se entra a valorar las particularidades que se presentan en materia de responsabilidad civil como la amplia difusión del ilícito, el alcance de la responsabilidad civil a las redes sociales como prestadoras de servicios a la sociedad de la información, así como el planteamiento de la responsabilidad civil de las distintas figuras en concepto de usuarios de las redes sociales que podemos encontrar.

## **ABSTRACT**

This paper explores the confrontation between the right to honor and the rights to freedom of expression and information as the main exponents of violations of the right to honor that social media users may suffer, although they are not the only ones. The development of this paper also aims to assess the particularities present in the field of civil liability such as the wide dissemination of the illegality, the scope of civil liability to social networks as providers of services to this information-centric society, as well as the approach to civil liability of the different figures of users of the social networks that we can find.

## **PALABRAS CLAVE**

Derecho al honor, derechos fundamentales, redes sociales, responsabilidad civil, usuarios.

## **KEYWORDS**

Right to honour, fundamental rights, social networks, civil liability, users.

## 1. INTRODUCCIÓN

El uso de Internet y las redes sociales están cada vez más presentes en la sociedad, facilitando las comunicaciones y las interacciones entre los miembros de una comunidad, sin embargo, el auge de estas tecnologías también trae consigo una serie de riesgos y problemas, más teniendo en cuenta que las redes sociales consisten en el volcado de información en la red. Generalmente las redes sociales son utilizadas con fines legítimos, compartir información con nuestros “*amigos*” por medio de *tuits*, fotografías, historias, seguir perfiles con nuestros gustos, comentar en publicaciones, etc. Sin embargo, todas estas acciones dejan una huella perpetua en la red y que de ser utilizadas con fines ilegítimos son origen de responsabilidad civil.

De todos los derechos que se pueden ver afectados dentro del uso de las redes sociales, centramos el objeto del trabajo en las vulneraciones al derecho al honor, en confrontación con los derechos a la libertad de expresión e información que opera dentro de las redes sociales.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es delimitar la responsabilidad de los usuarios de las redes sociales y la red social en sí misma, por las vulneraciones al derecho al honor que tengan lugar en el seno de esta, y en concreto, enfocarlo desde la perspectiva de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y libertad de información contemplados en el artículo 20 de la Constitución Española.

A lo largo del trabajo se entrará a desarrollar el contenido jurisprudencial de los derechos fundamentales al honor, libertad de expresión e información, así como el régimen de responsabilidad al que se aplicaría a los sujetos responsables articulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, así como el desarrollo de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio del 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, y su transposición en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, bajo las que se articulan los supuestos de responsabilidad de los servicios a la sociedad de la información.

Para ello el trabajo se divide en cinco puntos principales, el primero que se desarrolla trata de la conceptualización de las redes sociales, el origen de la personalidad virtual y su afectación a los derechos de la personalidad. En el segundo, se delimita el estudio a un derecho de la personalidad, el derecho al honor, y como entra en conflicto con los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información por medio del estudio de la doctrina y jurisprudencia sobre el contenido de estos derechos, así como la ponderación de derechos en la jurisprudencia con el fin de encuadrar las manifestaciones que salen del ámbito de protección de los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información y supongan vulneraciones al derecho al honor dentro de las redes sociales. Tras la delimitación de las particularidades del tema de estudio y los derechos en los que va a centrarse, el tercer punto entra a desarrollar la responsabilidad civil por la vulneración al derecho al honor desde las particularidades propias de las redes sociales, entrando a desarrollar las diferencias en los criterios de valoración de los daños morales y patrimoniales, por el estudio normativo y jurisprudencial al respecto. Finalmente, el último punto se centra en la figura de los potenciales responsables, diferenciando entre el sistema objetivo o subjetivo de la responsabilidad y entre la red social como responsable por el contenido que se sube en su plataforma, y los usuarios que añaden contenido a la red social, exponiendo las distintas formas en las que se puede originar y extender la responsabilidad por las actuaciones de los usuarios.

## 2. LA RED SOCIAL, LA APARICIÓN DE LA PERSONALIDAD VIRTUAL Y LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD

### 2.1. CONCEPTO DE RED SOCIAL

Vivimos en un mundo interconectado gracias a la aparición de internet, así las siglas que usamos en el buscador *www* significan *Word Wide Web*, la red que engloba el mundo<sup>1</sup>, ello sumado a los grandes avances tecnológicos que han tenido lugar en las últimas décadas han permitido que internet llegue a toda la sociedad y hace tiempo que podemos decir que vivimos en la sociedad de la información. Actualmente, gracias a un aparato que cabe en la palma de nuestra mano, podemos abrir una cuenta bancaria, hacer la compra, encontrar trabajo, así como facilita la búsqueda de información a nivel global.

Si la tecnología ha cambiado de forma tan drástica nuestra forma de actuar en el día a día, lógicamente ha modificado nuestra forma de relacionarnos con los demás en la sociedad, lo que se ha materializado con la aparición de las redes sociales<sup>2</sup>.

La RAE<sup>3</sup> define red social como:

Servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una plataforma de comunicación a través de internet para que estos generen un perfil con sus datos personales (...) permitiendo la comunicación entre sus usuarios, de modo que pueden interactuar

---

<sup>1</sup> MORALES VIALES, R; Y UGARTE IBARRA, R: *Tutela de los derechos de la personalidad virtual y protección de datos de carácter personal en las redes sociales online*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, 2012, p.15.

<sup>2</sup> Las primeras definiciones de redes sociales las encontramos en la doctrina americana de la que recogemos dos definiciones.

«We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system. The nature and nomenclature of these connections may vary from site to site» en BOID, D.M. y ELLISON, N. B., “Social network sites: Definition, history, and scholarship.” *Journal of Computer-Mediated Communication*, Volume 13, Issue 1, 2007, p. 211.

«Social networking services gather information on users’ social contacts, construct a large interconnected social network, and reveal to users how they are connected to others in the network. The premise of these businesses is that individuals might be only a few steps removed from a desirable business or social partner, but not realize it. The services allow their users to get to know one’s friends of friends and hence expand their own social circle» en ADAMIC, L. y ADAR, E., “How to search a social network”, 2005. p. 2

<sup>3</sup> Real Academia Española, <https://dej.rae.es/lema/red-social> (consultado el 1 de octubre de 2019).

mediante mensajes, compartir información (...) permitiendo que estas publicaciones sean accesibles de forma inmediata por todos los usuarios de su grupo.

El observatorio nacional de las telecomunicaciones y la sociedad de la información las define como «un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades<sup>4</sup>», o como una herramienta de «democratización de la información que transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos»<sup>5</sup>.

Otra definición es la que ofrecen MORALES VIALES Y UGARTE IBARRA «una estructura que gestiona las relaciones, comunicaciones o ligámenes entre grupos de personas, las cuales están conectadas por una o varios tipos de relaciones, tales como: amistad, parentesco, intereses comunes o bien, que comparten conocimientos.<sup>6</sup>»

En esencia una red social es un espacio en el que la persona, mediante la creación de un perfil personal on-line, interactúa con otros usuarios de la red y esta interacción genera una comunidad virtual. Por medio de las redes sociales nos convertimos en generadores de información, en la red social volcamos nuestra identidad al publicar nuestro nombre, edad e imagen, y nuestra personalidad ya que podemos compartir nuestros pensamientos, ideas, gustos, preferencias, inquietudes, etc.

La red social trabaja para generar en los usuarios sensación de confianza y seguridad para que puedan crear y compartir contenido, que en definitiva es una manifestación de su privacidad y personalidad, de tal manera que los usuarios de la red social con los que se interactúa compartiendo ese contenido personal se llaman “*amigos*”, lo que ya en sí denota subjetivamente persona de confianza, y el lugar en el que se comparte la información se llama “*muro*” sugiriendo que la interacción está blindada<sup>7</sup>. Este entorno de aparente confianza genera seguridad en el usuario a la hora de compartir su privacidad con sus “*amigos*”, aunque puede que en otras circunstancias ajenas a las que se dan dentro de la red social no lo hiciese, además contamos con el añadido de que la red social se basa en generar y compartir información, propia y de los demás, lo que hace aquello que compartes no sólo quede reflejado en tu muro, en tu perfil, con tus amigos, sino que pueda

---

<sup>4</sup> “Las redes sociales en internet”, 2011, p. 7, [https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/3614\\_d\\_redes\\_socialesdocumento\\_0.pdf](https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/3614_d_redes_socialesdocumento_0.pdf) (consultado el 1 de octubre de 2019).

<sup>5</sup> *Idem*.

<sup>6</sup> MORALES VIALES, R; Y UGARTE IBARRA, R, *Tutela de los derechos...*, Op. Cit., p.101.

<sup>7</sup> SOLER PRESAS, A, “Am I in Facebook?”, en *InDret revista para el análisis del derecho*, InDret 3/2011, 2011, p. 6.



ser retransmitida al resto de la comunidad virtual, bien por tener el perfil abierto a todos los usuarios, bien porque aun teniéndolo configurado como privado, sean tus “*amigos*” los que la comparten en sus perfiles y sus muros.

Cuanto más usuarios conozcan de un hecho, de una foto, de un pensamiento o expresión compartido por uno de ellos, más personas podrán opinar sobre los mismos, ya que las redes sociales también sirven de modo de comunicación entre los usuarios, permitiéndose dejar comentarios en los muros y publicaciones, darle a *me gusta*, *no me gusta*, o permitiendo la creación de grupos o chats individuales donde mantener una comunicación más fluida y directa entre usuarios, lo que conlleva que en ocasiones las expresiones u opiniones que se viertan sean conocidas entre un número más limitado de personas, o que sea de conocimiento público para cualquier usuario de la red social, lo que hace crecer exponencialmente la posible vulneración de los derechos de los usuarios y la máxima difusión social una vez acontecido el daño.

## 2.2. LAS REDES SOCIALES Y EL NACIMIENTO DE LA PERSONALIDAD VIRTUAL

Para la red social somos información, somos lo que de nosotros vertimos en la red, lo que origina la creación de una identidad virtual. Esta identidad virtual es «la personalidad desmaterializada en información.<sup>8</sup>» La personalidad virtual se manifiesta en el perfil que se genera de cada usuario en la red social, en su identidad, gustos, preferencias, es la disociación de sujeto físico en información dentro de la red, y todo lo que afecte a nuestra personalidad virtual tiene efectos sobre la esfera material de la persona, pues no es más que una manifestación virtual de nosotros mismos y todo lo que atañe a nuestra personalidad (honor, identidad, imagen, opiniones, creencias). «La personalidad virtual será la información digital de cada persona, la cual deberá ser considerada como centro de atribución e imputación de efectos jurídicos<sup>9</sup>», es una manifestación más de la persona, con la diferencia de que tiene lugar en la esfera virtual, lo que no impide que si la persona recibe un ataque en el campo de nuestra personalidad virtual deje de merecer la misma protección que si ocurriese fuera de ella.

---

<sup>8</sup> MORALES VIALES, R; Y UGARTE IBARRA, *Tutela de los derechos...*, Op. Cit., p.20.

<sup>9</sup> *Ibidem*, p.21.

### 2.3. LAS REDES SOCIALES Y LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD

Si, como hemos dicho, en las redes sociales se vuelca y comparte parte de lo que somos, nuestra identidad, imagen, pensamientos, opiniones, gustos, entre otros, lo que estamos haciendo es mostrar nuestra personalidad, un ámbito privado e individual de cada uno, en el sentido psicológico, de desarrollo social de la persona.

En sentido jurídico, este desarrollo personal se manifiesta por el libre desarrollo de la personalidad, la protección de ese ámbito más personal se lleva a cabo por medio de los derechos de la personalidad.

En la Constitución el artículo 10.1 CE alude a la dignidad de la persona humana y con ella a los derechos que le son inherentes y su ejercicio por medio del libre desarrollo de la personalidad, como fundamento del desarrollo social.

El hombre; por ser persona posee dignidad<sup>10</sup>, y esta dignidad le hace titular de ciertos derechos y obligaciones, necesarios para su desarrollo individual y social, estos son los derechos de la personalidad, que le protegen de otros sujetos en un plano de igualdad<sup>11</sup>. Siendo bienes esenciales de la persona, ligados a su dignidad, son irrenunciables, imprescriptibles e indisponibles<sup>12</sup>.

Por ello con la expresión «derechos de la personalidad» se suele hacer referencia a un conjunto de derechos que constituyen manifestaciones tanto exteriores como interiores, distintas en cada persona singular, su dignidad y su propio ámbito individual<sup>13</sup>. Son

---

<sup>10</sup> Así lo explica RYSZARD KOSMIDER, M., «Entonces, «la dignidad es el rango o la categoría que corresponde al hombre como el ser dotado de inteligencia y libertad» y consiste «en que el hombre, como ente ético espiritual, puede por su propia naturaleza, consciente y libremente, autodeterminarse, formarse y actuar sobre el mundo que le rodea». La dignidad se asocia intrínsecamente con «la capacidad humana de autogobierno individual», la autolegislación kantiana, la autodisponibilidad y la autodeterminación que corresponden a los campos vitales del ser humano, es decir, con decidir por su cuenta sobre su propia condición y su propio proyecto de vida.», en “El contenido jurídico del concepto del libre desarrollo de la personalidad con referencia especial a los sistemas constitucionales alemán y español”, en *Revista de Derecho UNED*, núm. 23, 2018, p. 697.

<sup>11</sup> BONILLA SÁNCHEZ, J. J., *Personas y derechos de la personalidad*, Colección Jurídica General, Madrid, Reus S.A., 2010, pp. 26 y 27.

<sup>12</sup> BERCOVITZ y RODRÍGUEZ-CANO, R.: *Manual De Derecho Civil. Derecho Privado Y Derecho De La Persona*, 7ª ed., Bercal, Madrid, 2017, p. 89.

<sup>13</sup> ENCABO VERA, M. A., *Derechos de la Personalidad*, Madrid, Marcial Pons, 2012, p. 15.

derechos que no recaen sobre la propia persona, sino sobre los atributos o manifestaciones esenciales de la personalidad<sup>14</sup>.

Los derechos de la personalidad son considerados derechos esenciales e innatos ya que nacen con la persona titular de los mismos sin necesidad de realizar acto jurídico alguno que motive su adquisición<sup>15</sup>. Por lo dispuesto en los artículos 29 y 32 del Código Civil, la personalidad viene determinada por el nacimiento y se extingue con la muerte del sujeto. «Nace con el hombre y se extingue con él, porque, jurídicamente hablando, es una condición o cualidad connatural al ser humano<sup>16</sup>».

Los derechos de la personalidad en la Constitución Española están recogidos en los artículos 15 a 18 y se dividen entre aquellos derechos que protegen la integridad física o corpórea de la persona, como el derecho a la vida, y los que protegen su integridad moral o psicológica, como derecho al honor, intimidad e imagen<sup>17</sup>. Al encuadrarse en el Título Primero, Capítulo Segundo, Sección Primera de la Constitución, es decir, en el Capítulo referido a los derechos fundamentales y libertades públicas, se denominan a los derechos contemplados en los artículos 15 a 18 como los derechos fundamentales de la personalidad<sup>18</sup>.

En el plano físico ejercemos externamente estos derechos por medio de la personalidad, y en el plano virtual por medio de la personalidad virtual. En esta última los derechos de la personalidad más afectados, por las particulares circunstancias del medio en las que se desarrolla la personalidad virtual son aquellos recogidos en el artículo 18.1 CE, honor, intimidad e imagen, de los cuales en este trabajo vamos a centrarnos en la exposición del derecho al honor.

---

<sup>14</sup> OLIVEROS LAPUERTA, M. V., *Estudios sobre la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen*, España Presidencia Del Gobierno Cuadernos De Documentación, Madrid: Presidencia Del Gobierno, Secretaría General Técnica, Subdirección General De Documentación, 1980, p.12.

<sup>15</sup> OLIVEROS LAPUERTA, M. V., *Estudios sobre la Ley...* Op. Cit., p.12.

<sup>16</sup> *Idem*.

<sup>17</sup> DE CASTRO Y BRAVO propone la sustitución del concepto derechos de la personalidad por el de bienes de la personalidad y los distingue entre los bienes esenciales de la personalidad (vida, integridad física y libertad) y bienes sociales e individuales de la personalidad (honor y fama, bienes corporales y psíquicos, intimidad personal, imagen) OLIVEROS LAPUERTA, M.V., *Estudios sobre la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen*, España Presidencia Del Gobierno Cuadernos De Documentación, Madrid: Presidencia Del Gobierno, Secretaría General Técnica, Subdirección General De Documentación, 1980, p. 13 *in fine*.

<sup>18</sup> La personalidad está constituida por los pensamientos y las acciones de la persona que la individualizan y difieren del resto de las personas. La personalidad conlleva la libertad de acción y pensamiento del individuo, es una manifestación externa, una manifestación dinámica de su dignidad a través de los derechos fundamentales, que son los que le otorgan la libertad de desarrollar su personalidad.

### 3. DERECHOS FUNDAMENTALES EN CONFLICTO; DERECHO AL HONOR, LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

#### 3.1. DERECHO AL HONOR

El derecho al honor se encuadra en el artículo 8 del del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales, por ser una manifestación del derecho a la vida privada<sup>19</sup>. En nuestra Constitución se recoge como derecho fundamental en el artículo 18.1, según el cual «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen». Y como normativa específica respecto al derecho al honor existe la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No obstante, aunque estas normativas recogen el derecho al honor, ninguna lo define.

La dificultad para encontrar una definición unificada del derecho al honor se debe, por un lado, porque tiene una doble dimensión. Por una parte, su dimensión interna, inmanencia en palabras del Tribunal Constitucional<sup>20</sup>, esto es el honor entendido como la estima que se tiene de uno mismo. Por otra parte, la dimensión externa, o trascendencia, que es el honor entendido como buena reputación y buena estima que tienen los demás de una persona<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> CLIMENT GALLART, J.A., “El estatuto jurídico del honor en el Convenio Europeo de Derechos Humanos: de una restricción legítima de la libertad de expresión a un derecho humano autónomo” EN *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 4, febrero 2016, p. 37.

<sup>20</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 605/2011 de 20 julio. (RJ\2011\6137) FJ. 4 «El derecho al honor es un derecho a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo -inmanencia o aspecto interno de tal derecho- o ante los demás transcendencia o aspecto social del mismo- y cuya negación o desconocimiento se produce, fundamentalmente, a través de alguna expresión o cualificación atribuida a una persona que inexcusablemente lo haga desmerecer en su propia estimación o en la del entorno social o profesional en que se desenvuelva.»

<sup>21</sup> Esta doble dimensión del derecho al honor ya se manifestaba en la Edad Antigua por medio del concepto *virtus* que consistían en una serie de valores que debían regir en la sociedad romana, y distinguía entre las virtudes personales y las públicas y más adelante en la Edad Media se distingue entre el honor, entendido como la apreciación de uno sobre su propia dignidad, y la honra, que es la concepción social, respeto, fama, reputación, generalmente al referirse a miembros y familiares de la nobleza. En BALMACEDA ERRAZURIZ, C., “*Virtus Romana* en el siglo I a.C.”, en *Dianlet*, Vol. 25, Nº 1, 2007, p. 303. y BONILLA SÁNCHEZ, J. J, *Personas y derechos de la personalidad*, Colección Jurídica General, Reus S.A., Madrid, 2010, pp. 77 y 78.

En otro sentido, la dificultad de definir en una norma qué debe entenderse por derecho al honor procede de su continua evolución histórica y social<sup>22</sup>. La falta de una definición en la normativa hace que se denomine un concepto jurídico indeterminado<sup>23</sup>.

En la actualidad, sobre normativa específica de protección al derecho al honor existe la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, para su obtener la tutela de estos derechos ante los Tribunales ordinarios de la jurisdicción civil, sin olvidar que al encontrarnos ante derechos fundamentales por estar recogidos en el Capítulo Segundo, Sección Primera «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas» de nuestra Constitución, según el artículo 53.2 CE, podrá recabarse su tutela mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el procedimiento regulado en el Título III de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y por la vía penal por los delitos de injurias y calumnias recogidos en los artículos 208 y 205 del Código Penal, respectivamente. En este trabajo nos centraremos en el estudio de la protección al derecho al honor por la vía civil y la aplicación de la Ley Orgánica 1/1982.

Entre las acepciones que tiene la RAE sobre el honor la segunda se refiere a «Gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se la granjea», más relacionada con la idea de honra que se ha expuesto, la octava se refiere a

---

<sup>22</sup> Ya en la antigua Roma tenemos la *existimatio* entendida como fama, reputación y renombre de la persona, la injuria era la lesión de la dignidad de la persona por la lesión de su *existimatio*, esta ofensa a la persona se llamaba contumelia y quedó recogido en la *lex cornelia de iniuriis* la cual concedía el derecho a no ser objeto de difamaciones públicas contra el honor. En SANTA CRUZ TEIJEIRO, J y D'ORS A., "A propósito de los Edictos Especiales «de iniuriis»" En *Dianlet*, 1979, p. 654 y BONILLA SÁNCHEZ, J. J., *Personas y derechos...* Op. Cit, p. 75.

En la edad media se distinguía entre el honor y la honra, la primera entendida por la concepción de cada uno de su propia dignidad, en sentido interno, y la segunda entendida como la apreciación y consideración de los demás de ese honor, hacia un sentido externo. El honor en esta época histórica tenía gran valor ya que era reservado para la nobleza y caer en la indignidad y deshonor podría dar lugar a la pérdida de dicho estatus. Las afrentas al honor en muchos de estos casos eran resueltas por medio de los duelos entre el acusador y el ofendido. En MAIZA OZCOIDI, C., "La definición del concepto del honor. Su entidad como objeto de investigación histórica", en *Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Hª Moderna*, t. 8, 1995, p. 197.

En la normativa española sobre el derecho al honor podíamos encontrar los códigos de honor y los Tribunales de Honor, formados a partir del Real Decreto de 3 de enero de 1867, sujetos principalmente a la jurisdicción militar, eran tribunales destinados a juzgar conductas u opiniones que pudiesen considerarse indignas y su finalidad no era proteger la dignidad del encausado, sino la dignidad del cuerpo al que pertenecía. En "Sinopsis del artículo 26 CE del Congreso de los Diputados", <https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=26&tipo=2> (consultado el 7 de octubre de 2019).

<sup>23</sup> Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 170/1994 de 7 junio. (RTC\1994\170), FJ 3.

«ceremonial con que se celebra a alguien por su cargo o dignidad.» Y sobre la expresión hacer honor a algo como «demostrar ser digno de algo».

Si bien las definiciones señaladas hacen cierta mención a la reputación y la liga a la dignidad de tal persona, para encontrar una definición más exacta de la actual concepción del derecho al honor debemos acudir a la doctrina y la jurisprudencia.

El honor es un concepto de difícil concreción, muy referido a este respecto es CESARE DE BECCARIA y la reflexión que incluyó en su libro *De los delitos y las penas* cuando reflexiona sobre que «la palabra honor es una de las que han servido de base para largos y brillantes razonamientos, sin que jamás se haya aplicado a una idea estable y bien determinada.<sup>24</sup>»

Para DÍEZ-PICAZO «El valor o bien jurídico protegido por el derecho al honor es el aprecio social, la buena fama, la reputación; en una palabra, el merecimiento a los ojos de los demás.<sup>25</sup>»

En palabras de VELA SÁNCHEZ «el honor es la estima que tiene un sujeto de sí mismo y la que los demás hacen de la dignidad de ese sujeto.<sup>26</sup>»

Para LÓPEZ JACOISTE, «el honor se sitúa en la conceptuación de la persona y consiste en la estima en que la persona es tenida por la sociedad o grupo al que pertenece o donde desarrolla su actividad (...) es la dimensión y valoración social de la personalidad.<sup>27</sup>»

El Tribunal Constitucional lo ha definido ampliamente en sentencias como la STC núm. 170/1994 de 7 junio<sup>28</sup>, FJ 3:

En una primera aproximación no parece ocioso dejar constancia de que en nuestro ordenamiento no puede encontrarse una definición de tal concepto, que resulta así jurídicamente indeterminado. Hay que buscarla en el lenguaje de todos, el cual (...) nos lleva del honor a la buena reputación (...), la cual -como la fama y aun la honra- consiste en la opinión que las gentes tienen de una persona, buena o positiva si no van acompañadas

---

<sup>24</sup> BECCARIA, C y VOLTAIRE, *De los delitos y las penas*, traducción de J.A. de las Casas, Alianza Editorial, Madrid, 1968, p. 41.

<sup>25</sup> DÍEZ-PICAZO, L. M: *Sistema de derechos fundamentales*, 4ª ed. Derechos Fundamentales Y Libertades Públicas. Cizur Menor: Civitas, Navarra, 2013, p. 293.

<sup>26</sup> VELA SÁNCHEZ, J.A., *Los Derechos de la Personalidad*, Derecho Civil para el Grado I, Dykinson, 2013, p. 77.

<sup>27</sup> LÓPEZ JACOISTE, J.J. *Intimidación, honor e imagen ante la responsabilidad civil*, en Homenaje a J.B. Vallet de Goytisolo, Vol. IV, Madrid, 1989, p. 578 y referenciado por O'CALLAGHAN, X., *Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidación e imagen*. Madrid, EDERSA, 1991, pp. 37 y 38.

<sup>28</sup> Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 170/1994 de 7 junio. (RTC\1994\170) FJ 3.

de adjetivo alguno. Así como este anverso de la noción se da por sabido en las normas éstas en cambio intentan aprehender el reverso, el deshonor, la deshonra o la difamación, lo infamante. El denominador común de todos los ataques o intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección de este derecho es el desmerecimiento en la consideración ajena (...) como consecuencia de expresiones proferidas en descrédito o menosprecio de alguien o que fueren tenidas en el concepto público por afrentosas.

Todo ello nos sitúa en el terreno de los demás, que no son sino la gente, cuya opinión colectiva marca en cualquier lugar y tiempo el nivel de tolerancia o de rechazo. El contenido del derecho al honor es lábil y fluido, cambiante y en definitiva, como hemos dicho en alguna otra ocasión, «dependiente de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento».

Esta concepción del contenido al derecho al honor se mantiene hasta la actualidad, como se refleja en la sentencia STC núm. 133/2018 de 13 diciembre, FJ 4:

El “honor”, como objeto del derecho reconocido en el art. 18.1 CE, es un concepto jurídico normativo cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento. No obstante esta imprecisión del objeto del derecho al honor, no hemos renunciado a definir su contenido constitucional abstracto al afirmar que “este derecho ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o que sean tenidas en el concepto público por afrentosas”. En suma, el mencionado derecho fundamental “prohíbe que nadie se refiera a una persona de forma insultante o injuriosa o atentando injustificadamente contra su reputación, haciéndola desmerecer ante la opinión ajena, de modo que lo protegido por el art. 18.1 CE es la indemnidad de la apreciación que de una persona pueden tener los demás, y quizá no tanto la que aquella desearía tener.”

Y más recientes, en el mismo sentido a las expuestas se encuentran las sentencias STC núm. 25/2019 de 28 febrero<sup>29</sup> y STS núm. 201/2019 de 3 abril<sup>30</sup>, esta última recoge de forma sintética lo expuesto en su FJ 3.7:

Doctrinalmente se ha definido como dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona. Como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional (...) En cuanto a su contenido, este derecho protege frente a atentados en la reputación personal, entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos impidiendo la difusión de

---

<sup>29</sup> Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 25/2019 de 28 febrero. (RTC 2019\25). FJ 4.

<sup>30</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) Sentencia núm. 201/2019 de 3 abril. (RJ\2019\1214).

expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella.

En sentido jurídico, el derecho al honor protege la buena reputación, fama u honra de una persona, y es el derecho de la persona al respeto y reconocimiento de su propia dignidad, lo que implica que la persona siempre va a tener reconocido un mínimo de respeto, impidiéndose que pueda ser menospreciada, vejada o humillada ante sí misma o ante los demás.

Si acudimos a la Ley Orgánica 1/1982, ésta nos ofrece una definición en sentido negativo tipificando en su artículo 7 una serie de acciones que se considerarán intromisiones ilegítimas<sup>31</sup> en el derecho al honor. Así, el artículo 7.3 se refiere a «La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre.» Y en el punto 7 «La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.»<sup>32</sup>

Preceptos que hablan de reputación, buen nombre, fama y propia estimación de la persona, a los que alude el Tribunal Constitucional<sup>33</sup>, añadiendo la lesión de la dignidad de la persona. Esta referencia a la dignidad de la persona liga con su artículo primero cuando indica que los derechos protegidos por esta normativa son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles, y declara nula toda renuncia a la protección de dichos derechos, características que corresponden a los derechos de la personalidad por su unión a la dignidad de la persona<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Las normas, como bien dice la Sentencia Tribunal Constitucional (Sala Primera) núm. 139/1995 de 26 septiembre. (RTC 1995\139), no contemplan una definición de derecho al honor, no obstante, éstas «intentan aprehender el reverso, el deshonor, la deshonra o difamación, lo difamante. El denominador común de todos los ataques e intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección de este derecho es el desmerecimiento en la consideración ajena (art. 7.7 LO 1/1982) como consecuencia de expresiones proferidas en descrédito o menosprecio de alguien o que fueren tenidas en el concepto público por afrentosas» (STC 223/1992 de 14 de diciembre. [RTC 1992\223] y, recientemente, Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1995 de 22 de mayo. [RTC 1995\76]).» FJ 4.

<sup>32</sup> DÍEZ-PICAZO argumenta a este respecto «No deja de ser significativo que el artículo 7 de la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, que hace una enumeración notablemente detallada y objetiva de los comportamientos lesivos de la intimidad y la imagen, dedique solo su último apartado a describir las agresiones al honor y, además, en términos tan vagos.» en *Sistema de derechos fundamentales*, Op. Cit. p. 294.

<sup>33</sup> Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 25/2019 de 28 febrero. (RTC 2019\25).

<sup>34</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) Sentencia núm. 201/2019 de 3 abril. (RJ2019\1214) y cuyo planteamiento sostiene desde sus primeros pronunciamientos sobre el derecho al honor, como se manifiesta en Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985 de 11 abril. (RTC 1985\53), FJ 8. En la doctrina lo desarrolla DÍEZ-PICAZO en *Sistema de derechos fundamentales*, Op. Cit. p. 293 y BERCOVITZ y RODRÍGUEZ-CANO en *Manual De Derecho Civil*. Op. Cit. p. 89.



### 3.2. DERECHOS FUNDAMENTALES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

En el artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 establece que se entenderán por vulneraciones al derecho al honor «La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.» Es decir, el derecho al honor entra en conflicto principalmente con dos derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información, ambos recogidos en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales<sup>35</sup> y en el artículo 20 CE, por lo que merecen un especial desarrollo en este estudio.

#### 3.2.1. CONCEPTO Y LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El derecho a la libertad de expresión queda recogido en el artículo 20.1.a) CE:

*1. Se reconocen y protegen los derechos:*

*a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.*

La libertad de expresión comprende<sup>36</sup> la emisión de ideas, pensamientos, opiniones, ya sea desde la palabra o el escrito y desde cualquier medio, pueden encontrarse en medios de comunicación como una columna de opinión en un periódico, programas radiofónicos o, cómo no, en las redes sociales. Estas manifestaciones para encuadrarse dentro de la

---

<sup>35</sup> Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente. Estableciendo en su artículo 10 que «toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras».

<sup>36</sup> La asentada doctrina del Tribunal Supremo se encuentra perfectamente definida en la Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 521/2016 de 21 julio. (RJ 2016\3430) FJ 4: «la libertad de expresión comprende el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, (...) no comprende, (...) la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo-».

protección al derecho a la libertad de expresión requieren ser manifestadas desde el respeto y se caracterizan por el componente subjetivo, son valoraciones propias que hace la persona que las emite, propias e individuales, no pueden ser comprobadas ni demostradas.

Dentro del ejercicio de este derecho también se encuentra la crítica a las conductas ajenas, «aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige»<sup>37</sup>, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe “sociedad democrática”». <sup>38</sup> Que una expresión u opinión sean molestas o de mal gusto no conlleva en sí mismo la vulneración del derecho al honor, sin embargo, no se contempla un derecho al insulto, la manifestación de expresiones injuriosas o manifiestamente vejatorias, humillantes e hirientes o que atenten contra la dignidad del ofendido, como así es doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos<sup>39</sup>, Tribunal Constitucional<sup>40</sup> y Tribunal Supremo<sup>41</sup>.

---

<sup>37</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 521/2016 de 21 julio. (RJ 2016\3430) FJ 4 citando como referencia las Sentencias del Tribunal Constitucional (Sala Primera) núm. 6/2000 de 17 de enero. (RTC 2000, 6), FJ 5; 49/2001, de 26 de febrero. (RTC 2001, 49), FJ 4; y 204/2001 de 15 de octubre. (RTC 2001, 204), FJ 4.

<sup>38</sup> Siguiendo la doctrina señalada por el TEDH en sentencias como en el Caso Ashby Donald y otros contra Francia. Sentencia de 10 enero 2013. (TEDH 2013\7).

<sup>39</sup> Caso Jiménez Losantos contra España. Sentencia de 14 junio 2016. (TEDH 2016\51); Caso Ergüdoğan contra Turquía. Sentencia de 17 abril 2018. (TEDH 2018\40); Caso Bédat contra Suiza. Sentencia de 29 marzo 2016. (JUR 2016\63824), entre otras.

<sup>40</sup> Sentencias del Tribunal Constitucional (Sala Primera) núm. 216/2013 de 19 de diciembre. (RTC 2013, 216); 77/2009 de 23 marzo (RTC 2009\77); 56/2008 de 14 abril. (RTC 2008\56); 9/2007 de 15 de enero. (RTC 2007, 9), entre otras muchas.

<sup>41</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 521/2016 de 21 julio. (RJ 2016\3430) FJ 5, basándose en la doctrina de la misma sala en sentencias como Tribunal Supremo Sentencias 314/2010 de 4 de diciembre. (RJ 2010\3699) y 904/2011 de 30 de noviembre. (RJ 2012\1642), considera que las expresiones «fascista», «maltratador», «persona violenta», «persona con malos instintos», «instalado en un protagonismo patológico», «lleno de falsedades», «de manipulaciones», «repugnante», «una persona muy sospechosa», «un mentiroso y un manipulador», «un chulo», «con un comportamiento absolutamente obsceno», «personaje violento», «pájaro», «basura», «indeseable», «matón», «machista disfrazado», «un tío violento y peligroso» vertidas en un programa de televisión contra el demandante suponen «tanto aisladamente consideradas como en su conjunto, un marcado y principal carácter insidioso, vejatorio, y gratuito que agravan innecesariamente la dignidad del demandante. (...) los términos empleados en los que se usan, con reiteración extrema, expresiones humillantes e hirientes que van más allá de lo admisible en el marco de una crítica legítima de la actividad ajena, no solo denotan el mal gusto de quien las emplea, sino que sin duda constituyen una ofensa innecesaria para la persona a la que se dirigen, irrelevantes en la transmisión de la opinión, lo que permite concluir que en este caso existen razones para revertir el mayor peso de la libertad de expresión en favor del derecho al honor del demandante...»

### 3.2.2. CONCEPTO Y LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

El derecho a la libertad de expresión queda recogido en el artículo 20.1.d) CE:

*1. Se reconocen y protegen los derechos:*

*d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.*

La libertad de información, a diferencia de la libertad de expresión, comprende la comunicación, por cualquier medio, de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo<sup>42</sup>.

Entre los requisitos y límites del derecho a la libertad de información están la veracidad y el interés público de la noticia. Con respecto la primera, se entiende por veracidad la diligencia mostrada al contrastar la noticia según los criterios profesionales y ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando por el paso del tiempo pueda llegar a ser desmentida o no confirmada<sup>43</sup>. Se falta a la veracidad cuando se dan por ciertos hechos que son meros rumores o invenciones. En línea con lo que se ha expuesto, la jurisprudencia<sup>44</sup> no exige que la información aportada en la noticia sea rigurosamente exacta, pero no contemplará como amparado por el derecho a la libertad de información cuando se actúe faltando a la veracidad y falseando lo que se comunica, actuando de forma negligente e irresponsable<sup>45</sup>. El requisito constitucional de veracidad implica que

---

<sup>42</sup> Audiencia Provincial de Valencia (Sección 6ª) Sentencia núm. 338/2014 de 5 diciembre. (AC\2015\633).

<sup>43</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 372/2019 de 27 junio. (RJ 2019\2632) FJ5, en referencia a las Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 216/2013 (RTC 2013, 216); 139/2007 (RTC 2007, 139) y 29/2009 (RTC 2009, 29).

<sup>44</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 372/2019 de 27 junio. (RJ 2019\2632), FJ 5, citando la asentada doctrina del Tribunal Constitucional en sus Sentencias 6/1988 (RTC 1988, 6), 105/1990 (RTC 1990, 105), 171/1990 (RTC 1990, 171), 172/1990, 143/1991, 197/1991 (RTC 1991, 197), 40/1992, 85/1992 (RTC 1992, 85), 240/1992 (RTC 1992, 240) y 1/2005 (RTC 2005, 1) y del Tribunal Supremo en las Sentencias 2 de diciembre. (RJ 2013, 7412), recurso de casación número 547/2010, y 15 de enero de 2014 (RJ 2014, 11).

<sup>45</sup> El requisito exigible es la veracidad, que no necesariamente la verdad propiamente dicha, en este sentido el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en su sentencia de (Pleno) Sentencia núm. 58/2018 de 4 junio. (RTC 2018\58) FJ 7.a) «El requisito de veracidad, cuya ponderación reviste especial interés cuando la libertad de información colisiona con el derecho al honor, no insta a que los hechos sean rigurosamente verdaderos, sino que se entiende cumplido en los casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de aquéllos con la diligencia exigible a un profesional de la información. Así, queda protegida por el derecho fundamental incluso la noticia errónea, siempre que haya precedido dicha indagación y que el error no afecte a la esencia de lo informado.»

el informador tiene un deber de comprobar la veracidad realizando las averiguaciones necesarias a tal fin y empleando la suficiente diligencia de averiguación<sup>46</sup>.

Con respecto al segundo, el derecho a la libertad de expresión «garantiza la existencia de una opinión pública libre, indispensable para la efectiva consecución del pluralismo político»<sup>47</sup>, para ello, los hechos deben ser «noticiables», en el sentido de que contribuyan a la formación de esa opinión pública a la que nos hemos referido, bien porque la información esté ligada a personas con proyección pública o por la relevancia pública del hecho<sup>48</sup>.

La diferencia básica entre ambos derechos es que en el derecho a la información se requieren de datos objetivos, veraz es la palabra que referencia el mismo artículo, en cambio la libertad de expresión requiere de un componente subjetivo, son ideas, pensamientos, juicios que hace uno mismo de la realidad y el entorno, no son objetivamente contrastables con las ideas o pensamientos de los demás, como sí es el derecho a la información, son individuales de cada uno de nosotros, por ello los tribunales le permiten un campo de acción más amplio al derecho a la libertad de expresión que al derecho a la libertad de información. Aun con ello, ningún derecho es absoluto<sup>49</sup>, por lo que el artículo 20 CE, aparte de reconocer el derecho a la libertad de expresión e información, en su apartado cuarto establece sus límites en el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a las leyes que los desarrollen y «especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia», es decir, los derechos de la personalidad.

### 3.3. PONDERACIÓN DE LOS DERECHOS EN CONFLICTO

Los derechos fundamentales recogidos en la Constitución responden a principios y valores plurales que no se basan en la jerarquización, ninguno está por encima de otro,

---

<sup>46</sup> Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 139/1995 de 26 septiembre. (RTC\1995\139), FJ 7

<sup>47</sup> Tribunal Constitucional (Sala Primera) núm. 187/1999 de 25 octubre. (RTC\1999\187) FJ 12.

<sup>48</sup> Tribunal Constitucional (Sala Primera) núm. 12/2012 de 30 enero. (RTC 2012\12), FJ 4.

<sup>49</sup> Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 170/1994 de 7 junio. (RTC\1994\170), e igualmente se ha sostenido dicho planteamiento hasta la actualidad en la Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 25/2019 de 28 febrero. (RTC 2019\25).

sino que responden a los criterios de ponderación<sup>50</sup>. La solución al conflicto entre la confrontación de dos derechos fundamentales es, teniendo en cuenta el caso concreto, valorar los criterios de ponderación, las condiciones por las que un derecho prevalecerá sobre otro<sup>51</sup>.

Si en el artículo 20.1 CE encontrábamos recogidos el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información, en su apartado cuarto encontramos la limitación de estos derechos «en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen...» Más allá de los límites desarrollados en apartados anteriores, los derechos a la libertad de expresión e información tienen un límite constitucionalmente recogido, y es el respeto al derecho al honor.

Los criterios más relevantes para realizar la ponderación son, siempre dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso, la ponderación en abstracto de los derechos en conflicto, el interés general de la información, la condición pública o privada del ofendido<sup>52</sup>, la necesaria proporcionalidad de las opiniones y expresiones vertidas<sup>53</sup> y el contexto en el que se desarrollan<sup>54</sup>.

i) Ponderación en abstracto de los derechos en conflicto

Tiende a partirse de la idea de prevalencia, que no jerarquía, de los derechos de libertad de expresión e información sobre el derecho al honor ya que estos dos primeros son esenciales para el desarrollo del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe «sociedad democrática» y como garantía para la formación de una

---

<sup>50</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 201/2019 de 3 abril. (RJ\2019\1214), FJ 3.

<sup>51</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 201/2019 de 3 abril. (RJ\2019\1214), FJ 3.4 «Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución española responden a principios y valores plurales. Esta pluralidad no se organiza por un criterio de jerarquización sino de ponderación. Dado que los principios y los valores se caracterizan por su capacidad para relativizarse, para poder conciliarse recíprocamente, cuando dos derechos fundamentales que encarnan principios y valores diferentes entran en colisión en un determinado supuesto de hecho, la norma que consagra uno de ellos limita la eficacia jurídica de la que consagra el otro. Esta situación no se soluciona excluyendo a priori la vigencia de uno de ellos ni estableciendo una regla que excepcione, en todos los casos futuros, la eficacia de uno de los derechos fundamentales cuando entra en conflicto con el otro. La solución de la colisión entre derechos fundamentales y, consecuentemente, entre los principios encarnados en ellos, consiste en que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, ha de establecerse una relación de prevalencia condicionada en la que, tomando en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso concreto, se indiquen las condiciones bajo las cuales un derecho fundamental prevalece sobre el otro.»

<sup>52</sup> Tribunal Constitucional (Sala Primera) núm. 187/1999 de 25 octubre. (RTC\1999\187), FJ 12 y 13.

<sup>53</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 201/2019 de 3 abril. (RJ\2019\1214), FJ 3.

<sup>54</sup> Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 9/2007 de 15 enero. (RTC 2007\9), FJ 4.

opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático<sup>55</sup>.

A pesar de partir de esta concepción, no siempre prevalecerán el derecho a la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor ya que las expresiones o informaciones deberán encuadrarse dentro de éstos. A este respecto deberá valorarse si la opinión o información vertida tiene relevancia pública e interés general, las cuales, como se expondrá, tienen mayor peso cuando a quienes nos referimos sean personas que desempeñan un cargo público o tienen notoriedad pública. A su vez, y aun cumpliéndose estos requisitos, las opiniones y la información deberán ser proporcionales, es decir, cuando las expresiones que se manifiesten o la información que se publica contengan un contenido insultante, vejatorio e injurioso, o se refiera a hechos o circunstancias cuya revelación o divulgación sean innecesarios para el fin de la noticia que se da, el afectado en estos supuestos es «a todos los efectos, un particular como otro cualquiera que podrá hacer valer su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen frente a esas opiniones, críticas o informaciones lesivas<sup>56</sup>» a sus derechos, por ser a su vez incompatibles con la dignidad de la persona.

ii) El interés general de la información

Criterio aplicable en la valoración del derecho al honor frente el derecho a la libertad de información.

En el interés general de la información se refiere a que el hecho que motiva la noticia sea noticioso o noticiable, bien porque se refiera a personas con proyección pública o a asuntos de interés público o mediático. Así, por ejemplo, se ha declarado que la gestión pública siempre presenta interés general<sup>57</sup> y la información sobre un proceso penal<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 521/2016 de 21 julio. (RJ\2016\3430), FJ 4.

<sup>56</sup> Tribunal Constitucional (Sala Primera) núm. 134/1999 de 15 julio. (RTC\1999\134), FJ 7, en el mismo sentido tenemos las Sentencias núm. 187/1999 de 25 octubre. (RTC\1999\187) FJ 12 y 13 y núm. 99/2002 de 6 mayo. (RTC\2002\99), FJ 7 y 8.

<sup>57</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 425/2015, de 8 de julio. (RJ 2015, 2774), Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 613/2016, de 7 de octubre. (RJ 2016, 4745) y Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 450/2017 de 13 julio. (RJ 2017\3623).

<sup>58</sup> Tribunal Constitucional (Sala Primera) núm. 14/2003, de 28 de enero. (RTC 2003, 14), y Tribunal Constitucional (Sala Primera) núm. 244/2007, de 10 de diciembre. (RTC 2007, 244) citadas por Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 426/2017 de 6 julio. (RJ 2017\3194).

Un ejemplo en el que no se aprecia el requisito del interés general se observa en la STS núm. 641/2019 de 26 noviembre<sup>59</sup>. En esta sentencia el hecho noticioso que se trata es la aparición de un OVNI hace 38 años, de la que fue testigo el actor, médico de profesión, que dio su versión de lo sucedido, lo cual acaparó la atención de la prensa en su momento. En el año 2016 se publica un artículo en la edición impresa y web del periódico La Provincia, en el que se refieren a la difícil personalidad del actor (déspota. soberbio, irascible, impaciente, terco...) e incide en aspectos de su vida privada como sus relaciones familiares. Atendiendo a los requisitos que exige el derecho a la libertad de información, se argumenta que las circunstancias personales del actor no son un hecho que quepa dentro del interés general por el avistamiento de un OVNI hace 38 años, teniendo en cuenta que tampoco era político o una persona con relevancia pública, por lo que la publicación afectaba a su fama y estima y consiguientemente, a su honor.

La sentencia también matiza que el artículo 20.1 CE no comprende un derecho a satisfacer la curiosidad ajena «generadora de molestias y perturbaciones, que las personas afectadas no tienen que soportar y menos acompañadas de expresiones que le hacen desmerecer».<sup>60</sup>

### iii) La condición pública o privada del ofendido

Aplicable tanto en la confrontación del derecho al honor con el derecho a la libertad de expresión como con el derecho a la libertad de información. Sobre la valoración de este criterio ha señalado la jurisprudencia en numerosas ocasiones<sup>61</sup> que los personajes públicos o personas de notoriedad pública pueden ver limitado en mayor medida la defensa de su derecho al honor frente a los derechos de libertad de expresión e información, precisamente por la publicidad de su figura.

Son personajes públicos aquellos que tienen atribuida la administración del poder público, es decir, políticos, y son personajes de notoriedad pública los que alcanza notoriedad e interés por difundir su vida privada.

---

<sup>59</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 641/2019 de 26 noviembre. (RJ 2019\4968).

<sup>60</sup> *Ibidem*, FJ 2.

<sup>61</sup> Caso Ergüdoğan contra Turquía. Sentencia de 17 abril 2018. (TEDH 2018\40); Caso Ernest August Von Hannover contra Alemania. Sentencia de 19 febrero 2015. (TEDH 2015\26), Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Primera) núm. 115/2000 de 5 mayo del 2000. (RTC 2000\115); Sentencias del Tribunal Supremo núm. 79/2014 de 28 de mayo. (BOE-A-2014-6653), FJ 8 y núm. 480/2019 de 20 de septiembre. (ECLI: ES:TS:2019:2975), FJ 3 y 7.

Sobre los personajes públicos se ha declarado que se encuentra dentro de la libertad de expresión «las expresiones que constituyen una crítica política a un personaje público y a su actuación política (...) y también los calificativos relativos a aspectos de su personalidad relacionados con su actuación como cargo público, por más que resulten duras o hirientes<sup>62</sup>.» Esto es debido a que, por su condición, se exponen de forma inevitable al control de su conducta, su imagen y sus opiniones, sometidas al escrutinio de los ciudadanos por el interés legítimo a saber cómo, en su actuación política, ejercen el poder en su nombre<sup>63</sup>.

En este mismo sentido también se ha reconocido que en contextos de contienda o confrontación política se otorga prevalencia a la libertad de expresión. Un ejemplo se encuentra en la STS 338/2018 de 6 junio<sup>64</sup>, en el que un concejal del PSOE acusó a un dirigente del PP, abogado de profesión de «ser un mercenario de la palabra y de la política, y de mentir por dinero», en este caso se argumentó que las expresiones vertidas servían para el fin de restar valor y credibilidad al demandado, como miembro del partido contrario, en una rueda de prensa con un contexto de rivalidad política lo que no daba lugar a la vulneración de su honor.

Las personas con notoriedad pública corren mayor riesgo frente a las críticas, opiniones e informaciones sobre su vida que puedan ser molestas e hirientes en cuanto son estas mismas las que alcanzan esa notoriedad pública por exponer su actividad profesional o su vida privada al conocimiento de terceros. Estos personajes, como cualquier otro particular, podrán hacer valer sus derechos frente a opiniones y críticas que atenten con sus derechos de la personalidad, lo que no pueden pretender, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional<sup>65</sup>, es silenciar a quienes divulgan, comentan o critican lo que ellos mismos han expuesto al público. Pese a esta argumentación, no existe un derecho a satisfacer la curiosidad ajena ya que la información que se publique debe poseer relevancia pública y servir al interés general<sup>66</sup>.

---

<sup>62</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno) Sentencia núm. 551/2017 de 11 octubre. (RJ\2017\4283), FJ 2.3.

<sup>63</sup> Tribunal Constitucional (Sala Primera) núm. 134/1999 de 15 julio. (RTC\1999\134), FJ 7.

<sup>64</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 338/2018 de 6 junio. (RJ 2018\2408).

<sup>65</sup> Tribunal Constitucional (Sala Primera) núm. 134/1999 de 15 julio. (RTC\1999\134), FJ 7.

<sup>66</sup> Unos ejemplos los podemos encontrar en la sentencia señalada *ut supra*, en la Sentencia Tribunal Constitucional (Sala Primera) núm. 115/2000 de 5 mayo. (RTC 2000\115) y también en la Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 605/2011 de 20 julio. (RJ\2011\6137) FJ 4.



En el caso de que nos encontremos ante noticias que afecten a personas privadas, sobre hechos relativos a su vida, carentes de relevancia pública, se deberá demostrar que lo que se expone es necesario para la información que se da.

iv) La necesaria proporcionalidad de las opiniones y expresiones vertidas

Criterio que entra en relación cuando se valora el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión e incide indirectamente en el derecho a la libertad de información.

Cuando se trata de ponderar la proporcionalidad de las expresiones cuando nos encontramos entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión debemos atender a varios matices.

Uno de ellos es el que encontramos en la STS núm. 201/2019 de 3 abril<sup>67</sup>, de las más recientes sobre la vulneración al derecho al honor en conflicto con el derecho a la libertad de expresión en redes sociales. En este caso una concejal de un ayuntamiento de un pueblo de Valencia publica una serie de mensajes en su cuenta de Facebook sobre el fallecimiento de un torero corneado por un toro durante una corrida, entre los que se puede encontrar expresiones como «Podemos tratar de ver el aspecto positivo de las noticias para no sufrir tanto...Ya ha dejado de matar» y «No puedo sentirlo por el asesino que ha muerto más que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso mientras vivió.»

En el juicio de ponderación del Tribunal se tiene en cuenta que los mensajes van dirigidos a alguien con cierta relevancia pública, como es un torero, y el contenido del mensaje que deriva de la polémica social que genera la tauromaquia. Aparte, en su decisión el Tribunal considera que las expresiones vertidas no están amparadas en el derecho a la libertad de expresión en cuanto se referían a «una persona que acababa de morir de un modo traumático», no mostrando la demandada compasión por el suceso sino mostrando alivio, calificándolo de asesino y aludiendo un aspecto positivo con su fallecimiento, saliéndose estas manifestaciones de la simple crítica a la tauromaquia ya que las profiere contra ese determinado torero, instantes después de su traumático fallecimiento, donde evidencia la intención de menospreciarlo<sup>68</sup>. El uso del término «asesino» se considera por los Tribunales como innecesario y superfluo para la opinión contraria a la tauromaquia que quería manifestar la demandada.

---

<sup>67</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 201/2019 de 3 abril. (RJ\2019\1214).

<sup>68</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 201/2019 de 3 abril. (RJ\2019\1214), FJ 4.

Aun cuando no nos encontramos ante insultos formales, o vejaciones inequívocas, la intención que comunica el mensaje, por medio del lenguaje utilizado, mostrando tranquilidad ante el fallecimiento del torero, calificarlo de asesino y ver un aspecto positivo en su muerte, supone una perturbación en el dolor de sus familiares y a la memoria y reputación del difunto<sup>69</sup>, siendo por tanto consideradas dichas expresiones contrarias al derecho a la libertad de expresión.

Otro supuesto a reseñar es, por tanto, cuando sí nos encontramos ante expresiones malsonantes, descalificativas o injuriosas. Este es el caso de la STS núm. 551/2017 de 11 octubre<sup>70</sup> la cual versa sobre la vulneración al derecho al honor de un político por haber sido calificado como «chorizo», «mangante» y «gilipollas» por un periodista, a consecuencia del debate surgido por una presunta financiación irregular recibida de Venezuela por el partido político del demandante. Estas expresiones fueron reiteradas tanto en el programa "La Sexta Noche", en la cuenta personal de Twitter del periodista, y en el programa "El Cascabel".

En este caso el Tribunal reitera la jurisprudencia sobre la ponderación de derechos expuesta y argumenta que el uso de tales términos de carácter insultante es innecesario para la crítica política que pretendía manifestarse por el periodista, aunque el destinatario ostente un cargo público y se viertan a raíz de unas polémicas actuaciones políticas, las declaraciones salen de la protección del derecho a la libertad de expresión. Así la Sentencia en su Fundamento Jurídico segundo expone:

Aunque los dirigentes políticos deben tolerar un nivel de crítica superior a las demás personas, porque con su actividad se exponen voluntariamente a un mayor control, esta mayor tolerancia a la crítica no tiene justificación cuando las expresiones proferidas en su contra son ajenas al fin legítimo de una comunicación vinculada a la disputa y a la crítica de las actividades públicas.

En cuanto a la incidencia en el derecho a la libertad de información, este exige congruencia del mensaje y en las expresiones utilizadas en su ejercicio, careciendo de protección aquellas expresiones que no guarden relación con la función comunicativa o informativa y el fin del interés público. En esta última sentencia referida, el Tribunal no

---

<sup>69</sup> *Idem*.

<sup>70</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno) Sentencia núm. 551/2017 de 11 octubre. (RJ\2017\4283).

entra a valorar la veracidad de la información sobre si ha existido esa supuesta financiación irregular que trae causa de las expresiones que se exponen, de entrar a su valoración no se aplicaría el criterio de la proporcionalidad de las opiniones o expresiones, sino el criterio de la veracidad que se exige en el desarrollo del derecho a la libertad de información.

Aun entrándose en la valoración de la veracidad de la información y que esta resultare cierta, ello no afectaría tampoco al criterio de ponderación desarrollado, en cuanto las expresiones manifestadas, «chorizo», «mangante» y «gilipollas», por sí solas, son constitutivas de vulneración al derecho al honor, independientemente de su veracidad.

De entrar a valorarse la veracidad de la noticia resultar a su vez falsa, podría recaer una doble vulneración al derecho al honor, una en relación con el derecho a la libertad de información por ser la noticia falsa y otra en lo relativo al derecho a la libertad de expresión por cuánto las expresiones aisladamente consideradas son vejatorias.

v) El contexto en el que se desarrollan

Entre los criterios de ponderación que cabe destacar es el contexto en el que expresiones tuvieron lugar ya que no tendrá la misma valoración aquellas que se presenten en un contexto de contienda que las que tengan lugar desde el sosiego y las proferidas oralmente o por escrito.

Con respecto al contexto en el que se dan las manifestaciones, la jurisprudencia concede mayor protección al derecho a la libertad de expresión «cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica experimentan una disminución de su significación ofensiva<sup>71</sup>». Estos son los denominados contextos de contienda o confrontación política. En el mismo sentido se encuentra la STS núm. 176/2014 de 24 de marzo de 2014<sup>72</sup> sobre el alcance de las expresiones «ser intelectualmente inferior» y «zoquete absoluto» en contextos de contienda se encuadran en el derecho a la libertad de expresión, argumentando a este respecto que:

---

<sup>71</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 407/2014 de 9 julio. (RJ\2014\4410) FJ 3.

<sup>72</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 176/2014 de 24 marzo. (RJ 2014\1752).

Las referencias (...) no tenían como finalidad el insulto, sino que con tales expresiones lo que se pretendía era criticar con especial dureza la actuación seguida o la línea mantenida (...) en cuanto al tema sobre el que se le preguntaba en ese momento, evidenciándose de las respuestas del demandado (...) que las posturas de ambos sobre el tema eran totalmente opuestas. Por tanto, las manifestaciones analizadas no vulneran el derecho al honor de los demandantes al estar amparadas por la libertad de expresión, pues contienen una dura crítica a la actuación profesional del demandante.

Atendiéndose al contexto puede valorarse que manifestaciones que independientemente consideradas en un contexto gramatical puedan resultar insultantes, incluyéndolas en el contexto social en el que se desarrollan, cuando sí están relacionadas con el mensaje que se proyecta, máxime si se presentan dentro de un conflicto o contienda política, sindical o social, disminuye su carga ofensiva y quedan encuadradas en el derecho a la libertad de expresión, dentro de las críticas que aunque resulten molestas e incómodas a su receptor, son legítimas. Si bien esto no significa que no siga operando el límite de los insultos y expresiones frontalmente vejatorias cuando resulten innecesarias o descontextualizadas de la idea o fin que se pretende transmitir. Este planteamiento trae causa del artículo 2.1 de la LO 1/1982, en cuanto remite a los usos sociales como delimitadores de la responsabilidad.<sup>73</sup>

Dentro del contexto se puede distinguir cuando las expresiones se realicen oralmente o por escrito, en una entrevista o en una intervención oral como un debate político o programas de la crónica social<sup>74</sup>. En lo referido al carácter escrito de las expresiones la STS núm. 94/2009 de 25 febrero<sup>75</sup> en la que la demandada califica de «descerebrada» en una página web a la actora, el Tribunal argumenta que las expresiones publicadas «tienen una mayor gravedad por ser un texto escrito, y por consiguiente meditado, por lo que ni siquiera cabe discurrir acerca de la improvisación del momento de las intervenciones, en radio o en televisión, que tienen lugar en directo.»

A estos respectos se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así en su STEDH de 29 febrero 2000<sup>76</sup> expone sobre unas manifestaciones realizadas en un programa radiofónico que estas «se insertarían en la dinámica de un programa de radio

---

<sup>73</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 176/2014 de 24 marzo. (RJ 2014\1752), Audiencia Provincial de Madrid (Sección 9ª) Sentencia núm. 550/2016 de 31 octubre. (JUR\2016\275896), Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 407/2014 de 9 julio. (RJ\2014\4410).

<sup>74</sup> Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 9/2007 de 15 enero. (RTC 2007\9).

<sup>75</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 94/2009 de 25 febrero. (RJ\2009\1515).

<sup>76</sup> Caso Fuentes Bobo contra España. Sentencia de 29 febrero 2000. (TEDH 2000\90).

en directo y en una conversación entre profesionales de la comunicación. Las declaraciones realizadas son características del lenguaje oral que conviene distinguir del lenguaje escrito.»

Y sobre esta distinción del lenguaje oral del escrito en la STEDH 14 marzo 2002<sup>77</sup> manifiesta que a diferencia del caso anteriormente expuesto, donde las expresiones se desarrollaban en un debate oral, éstas son por medio del escrito, «el Tribunal señala que los términos en cuestión no fueron proferidos en el marco de un intercambio oral rápido y espontáneo, sino que se trató de afirmaciones escritas, maduradas y de las que el demandante admitía que era plenamente consciente del alcance de su contenido.»

Con lo que se concluye que se deberá valorar en la ponderación de los derechos en conflicto si las expresiones publicadas tienen lugar en un contexto de contienda entre las partes, en el que podría prevalecer el derecho a la libertad de expresión, y valorar atendiendo al caso concreto, ya que las publicaciones en redes sociales suelen estar caracterizadas por su componente escrito, si han sido publicadas por dicho medio de forma consciente y reflexionada, lo que las distinguiría de las expresiones orales y harían prevalecer el derecho al honor frente al derecho a la libertad de expresión.

#### **4. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN REDES SOCIALES POR VULNERACIONES AL DERECHO AL HONOR**

Las redes permiten el volcado de información y la comunicación instantánea con multitud de usuarios al mismo tiempo, son un nuevo sistema de comunicación, pero conlleva una serie de riesgos, como la exposición. El uso de los medios sociales de comunicación como instrumentos para atacar a otros usuarios, o prevaleciéndose de una situación de anonimato, dan lugar a que haya usuarios que traspasan los límites de sus derechos dentro de las redes sociales en detrimento de los derechos del usuario que los recibe en su muro o sus publicaciones y generalmente dotadas de un amplio campo de difusión y propagación por los usuarios de la red social. Estas acciones son, si traspasan los límites expuestos en la primera parte de este estudio, constitutivas de la vulneración de derechos fundamentales, de entre los cuales aquí nos centramos en el derecho al honor, y, por ende,

---

<sup>77</sup> Caso De Diego Nafra contra España. Sentencia de 14 marzo 2002. (TEDH 2002\15).

originan el nacimiento de la responsabilidad civil para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos.

#### 4.1. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD

En los apartados precedentes se ha expuesto qué actuaciones suponen intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, ahora, entrando a desarrollar otros elementos de la responsabilidad civil hay que mencionar en primer lugar los criterios de imputación. En los criterios de imputación habrá de distinguir entre los criterios de imputación objetivos, en estos casos la responsabilidad se imputa independientemente de la apreciación de culpa o negligencia por lo que si ha habido una intromisión ilegítima se presume la causación del daño, o en la imputación subjetiva, cuando se requiere la mediación de culpa o negligencia para causar un daño.

Otro de los elementos esenciales de la responsabilidad civil es que el resultado de la conducta antijurídica produzca un daño<sup>78</sup>, estos daños pueden ser morales, que son daños en la esfera psíquica del sujeto<sup>79</sup> y no tienen un determinado contenido económico, o daños patrimoniales, que son daños ocasionados por la pérdida o menoscabo de sus bienes, son daños evaluables económicamente. En las redes sociales y por la vulneración al derecho al honor, los daños generalmente son morales, en cuanto suponen un menoscabo en la integridad moral de la propia persona y a su fama y reputación, más que en un sentido patrimonial, aunque en algunas ocasiones ese descrédito que pueden llegar a suponer en la esfera social del afectado pueda tener efectos en su ámbito patrimonial y originar colateralmente unos daños patrimoniales.

En el caso de las vulneraciones al derecho al honor, debemos acudir a la Ley Orgánica 1/1982, en la que su artículo noveno, en su apartado segundo, articula una serie de medidas para poner fin a las intromisiones ilegítimas y en concreto se adoptarán medidas encaminadas a obtener el restablecimiento de sus derechos por parte del perjudicado

---

<sup>78</sup> REGLERO CAMPOS, F, ÁLVAREZ LATA, N., *Lecciones De Responsabilidad Civil.*, José Manuel Busto Lago y Fernando Reglero Campos (coordinadores); Natalia Álvarez Lata ... [et Al.], 2ª ed., Colección Manuales Aranzadi. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2013, p. 548.

<sup>79</sup> Son daños morales indemnizables los consistentes en un sufrimiento o padecimiento psíquico o espiritual, que se tiene como consecuencia de la impotencia, zozobra (como sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre), ansiedad, angustia, incertidumbre, impacto, quebranto y otras situaciones similares. Sobre la existencia y presunción de los daños morales aludimos a la Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia 533/2000 de 31 mayo. (RJ 2000\5089) FJ 2.

mediante con la declaración de que se ha producido una intromisión en sus derechos, el cese de la misma y con ello la reposición al estado anterior de sufrir la intromisión. En el caso de vulneraciones al derecho al honor se añade la publicación de la sentencia condenatoria «con la misma difusión pública que tuvo la intromisión». También se adoptarán medidas para prevenir intromisiones futuras y una indemnización de los daños y perjuicios que se hayan causado al perjudicado. Estas medidas por lo tanto se dividen entre aquellas destinadas a poner fin a la vulneración mediante la acción de cesación que a su vez limita la posible difusión y las medidas encaminadas al resarcimiento del daño ya causado, como serían la acción de declaración y publicación de sentencia y la indemnización por los daños y perjuicios causados al perjudicado.

#### 4.2. LA PRESUNCIÓN DEL DAÑO EN LA LEY ORGÁNICA 1/1982

Ya el artículo noveno en su apartado tercero señala que «La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima.» Esta frase ha sido considerada pionera en el derecho porque es la primera vez que una norma alude a la presunción de un daño saliéndose de la norma general que requiere que se acredite la existencia y el alcance del daño, aunque no especifica qué tipo de daños son presumibles, lo que ha generado división de opiniones dentro de la doctrina<sup>80</sup>.

Esta división ha sido perfectamente desarrollada por la profesora ATIENZA NAVARRO<sup>81</sup> que divide entre si la presunción del artículo 9.3 de la LO 1/1982 se extiende sólo a los daños morales, siendo en este caso una presunción *iuris et de iure*, que no puede ser destruida, y si se extiende también a los daños patrimoniales, siendo en este caso una presunción *iuris tantum*, por lo que admite prueba en contrario<sup>82</sup>. Otra teoría mantiene que solo se presumen los daños morales, mientras que los daños patrimoniales deberán ser probados siguiendo la regla general.

---

<sup>80</sup> CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.L.: *Honor, intimidad e imagen*, Bosch, Barcelona, 1996 y MARTÍN CASALS, M: *Notas sobre la indemnización del daño moral en las acciones por difamación de la LO 1/1982*, en Centenario del Código Civil: (1889-1989), Centro de Estudios Ramón Areces, D.L. Tomo II, Madrid, 1990.

<sup>81</sup> ATIENZA NAVARRO, M.L., Capítulo IX. La responsabilidad civil por los daños producidos por las intromisiones ilegítimas en el derecho al honor. En: *Derecho al Honor: Tutela Constitucional, Responsabilidad Civil y Otras Cuestiones*, Aranzadi, 2015, p. 5.

<sup>82</sup> *Idem*.

#### 4.2.1. LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DE LOS DAÑOS MORALES

Sobre la necesidad de acreditación de la prueba objetiva de los daños morales se pronunció la STS 533/2000 de 31 mayo<sup>83</sup> en cuyo fundamento jurídico segundo concluye que:

Cuando el daño moral emane de un daño material, o resulte de unos datos singulares de carácter fáctico, es preciso acreditar la realidad que le sirve de soporte, pero cuando depende de un juicio de valor consecuencia de la propia realidad litigiosa, que justifica la operatividad de la doctrina de la «*in re ipsa loquitur*», o cuando se da una situación de notoriedad, no es exigible una concreta actividad probatoria.

Dado que en los casos de los procedimientos por vulneración al derecho al honor la intromisión deriva de la manifestación de un juicio de valor y no de daños materiales propiamente dichos, la jurisprudencia se acoge al segundo planteamiento doctrinal expuesto. Así encontramos numerosas sentencias como la STS 312/2012 de 7 mayo<sup>84</sup> la cual explica que la presunción contenida en el artículo 9.3 de la LO 1/1982:

Preceptúa que la tutela judicial comprenderá, entre otras medidas, la condena a indemnizar los perjuicios causados, presumiéndose en el párrafo 3.º con el carácter de *iuris et de iure* la existencia del perjuicio siempre que se acredite la intromisión ilegítima. No se trata de una presunción "*juris tantum*", sino que la intromisión ilícita supone per se la existencia del perjuicio indemnizable, a modo de una realidad, "*in re ipsa*"<sup>85</sup>.

Así pues, el artículo 9.3 de la LO 1/1982, cuando se aplica en aquellos procedimientos que versen sobre la vulneración al derecho al honor, establece una presunción *iuris et de iure* sobre los daños morales, en base a la dificultad de probar y cuantificar estos daños, para lo que aplica la doctrina *in re ipsa* o más concretamente, por encontrarnos ante daños morales, *in re ipsa loquitur*, a la que aludían las sentencias referentes y que se refiere a que no es imprescindible la prueba de los daños y perjuicios que se hayan causado cuando estos son inherentes al incumplimiento<sup>86</sup>.

---

<sup>83</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia 533/2000 de 31 mayo. (RJ\2000\5089).

<sup>84</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 312/2012 de 7 mayo. (RJ 2012\6111).

<sup>85</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 312/2012 de 7 mayo. (RJ 2012\6111) FH 7.

<sup>86</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencias núm. 312/2012 de 7 mayo. (RJ 2012\6111) y núm. 366/2010 de 15 junio. (RJ 2010\5151).



Siguiendo el planteamiento de la sentencia anteriormente referida podemos encontrar también las STS núm. 521/2016 de 21 julio<sup>87</sup> y STS núm. 388/2015 de 29 junio<sup>88</sup> que se acogen al planteamiento expuesto en su STS núm. 312/2014 de 5 junio, la cual interpreta que el artículo 9.3 de la LO 1/1982 «establece una presunción "*iuris et de iure*", esto es, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable cuando se haya producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor, y fija los criterios para valorar el daño moral.<sup>89</sup>»

De la jurisprudencia expuesta se desprende que a objetivación de la responsabilidad se dará frente a los daños morales, excluyendo de tal presunción los daños patrimoniales que se hayan podido causar, los cuales deberán ser probados conforme a la normativa general.

#### 4.2.2. CRITERIOS DE PONDERACIÓN DEL DAÑO MORAL

Que los daños morales, debido a su naturaleza, hagan dificultoso obtener una prueba objetiva, no implica que los tribunales no puedan establecer una indemnización o cuantificarlos. En este sentido, continuando con el desarrollo del contenido del artículo 9.3 de la LO 1/1982, sobre los criterios a seguir para valorar el daño, articula que «La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido.»

La STS núm. 551/2017 de 11 octubre<sup>90</sup> en su fundamento jurídico cuarto desarrolla la ponderación de los daños morales por la vulneración del derecho al honor, intimidad y propia imagen sobre las bases del artículo 9.3 de la LO 1/1982, determinando que se debe atender para su valoración las circunstancias de cada caso, i) el grado de difusión alcanzado, ii) la gravedad de los descalificativos o expresiones vertidas, iii) la aportación de imágenes, iv) el lugar que ocupa en la publicación, y v) la difusión digital.

---

<sup>87</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 521/2016 de 21 julio. (RJ 2016\3430), FJ 6.

<sup>88</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 388/2015 de 29 junio. (RJ 2015\2660) FJ 6.

<sup>89</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 312/2014 de 5 junio. (RJ\2014\3087) FJ 5.

<sup>90</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno) Sentencia núm. 551/2017 de 11 octubre. (RJ\2017\4283).

Al encuadrar el trabajo dentro de las vulneraciones al derecho al honor en las redes sociales y dado que los criterios de ponderación de los derechos fundamentales en conflicto no presentan modificaciones, es necesario atender en profundidad al criterio de la difusión.

En el caso de las redes sociales nos encontramos con el problema a la hora de ponderar el daño moral debido a la dificultad que entraña el cómo valorar el grado de difusión alcanzado. En el caso de las intromisiones ilegítimas al honor en redes sociales se corre el riesgo de que la información sea compartida en comentarios y muros de usuarios que pueden tener sus perfiles gestionados con un grado mayor o menor de privacidad, pudiendo ser visto y a su vez compartido por otros usuarios *amigos* o por terceros usuarios, llegando incluso a tal difusión social que pueda calificarse de *viral*.

Un ejemplo del posible grado de difusión de la información que se publica en las redes sociales la encontramos en la política de datos de Facebook:

Cualquier persona puede ver la información pública, tanto dentro como fuera de nuestros Productos, incluso aunque no tenga una cuenta. Entre estos datos se incluyen tu nombre de usuario de Instagram, la información que compartes de forma pública, la información de tu perfil público en Facebook y el contenido que compartes en una página de Facebook, una cuenta pública de Instagram o cualquier foro de carácter público, (...). Tú, otras personas que usan Facebook e Instagram y nosotros podemos conceder acceso a información pública o enviar dicha información a cualquier persona tanto dentro como fuera de nuestros Productos, al igual que en otros Productos de las empresas de Facebook, en los resultados de la búsqueda o por medio de herramientas y API. También es posible usar servicios de terceros, como motores de búsqueda, API y medios no relacionados con internet (como la televisión), así como aplicaciones, sitios web y otros servicios que se integran con nuestros Productos para acceder a información pública o verla, volver a compartirla o descargarla.<sup>91</sup>

Esta incontrolable difusión no solo complica la valoración del daño en un sentido económico, sino también la adopción de las medidas contenidas en el artículo 9.2 de la LO 1/1982. Aunque se declare la intromisión y se borre la publicación original es muy difícil controlar todas las veces que ha sido compartida entre los usuarios y difundida a otros medios o a otras redes sociales o motores de búsqueda o el eco que de las mismas

---

<sup>91</sup> <https://es-es.facebook.com/privacy/explanation> (consultado el 29 de octubre de 2019).

se puedan incluso hacer los medios de comunicación tradicionales<sup>92</sup>. Al mismo tiempo, aunque nos encontremos con una vulneración al derecho al honor y se declararse la publicación de la sentencia como incluye el artículo 9.2 de la LO 1/1982, ésta no podría tener lugar en los términos que estipula dicho artículo «con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida» porque sale de todo control la difusión que haya podido tener la publicación que da origen a la intromisión y que pueda seguir teniendo en el futuro por la imposibilidad de borrar todos los mensajes compartidos, quedando limitada esta medida, al menos, a la publicación de la sentencia en el perfil del autor de la intromisión.

En la jurisprudencia se han planteado dos criterios para la valoración de la difusión. Uno de los criterios se basa en fijar el criterio de valoración en las efectivas interacciones que ha originado el mensaje, valorando el número de comentarios en la publicación, los *me gusta*, *no me gusta*, o análogos, como ha sido planteado en la SAP Málaga núm. 33/2015 de 9 de junio<sup>93</sup>, SAP de Asturias núm. 229/2018 de 1 junio<sup>94</sup> y SAP de Málaga núm. 200/2018 de 28 marzo<sup>95</sup>, las cuales valoran dentro de la difusión la ausencia o el elevado número de comentarios originados en la publicación. Este criterio es menos aplicado y desde mi punto de vista, es el menos eficiente, pues en el caso de que la publicación haya contado con poca interacción, basar el criterio de ponderación de la difusión en los comentarios generados y no valorar el número de seguidores o si la cuenta es pública o privada, no permite determinar de forma efectiva el alcance real que haya tenido la publicación.

El segundo criterio, consiste en atender al número de seguidores que se tienen en la red social, considerándolos como potenciales conocedores del mensaje origen del ilícito.

Este criterio ha sido seguido en algunos supuestos para rebajar la indemnización de daños morales por su escasa publicidad como en la STS núm. 476/2018 de 20 julio<sup>96</sup>, la cual

---

<sup>92</sup> Entre los casos más sonados encontramos el caso de Cassandra Vera, absuelta por el Tribunal Supremo por la publicación de unos tuits irónicos, sobre el atentado terrorista que acabó con la vida de Carrero Blanco. El caso de Adrián Hinojosa, un niño con cáncer que participó en una corrida de toros para la recaudación de fondos y a quien varios tuiteros desearon la muerte y como ocurrió tras el fallecimiento de los toreros Iván Fandiño y Víctor Barrio.

<sup>93</sup> Sentencia Audiencia Provincial de Málaga (Sección 7ª, Melilla) Sentencia núm. 33/2015 de 9 junio. (AC 2015\115).

<sup>94</sup> Audiencia Provincial de Asturias (Sección 6ª) Sentencia núm. 229/2018 de 1 junio. (AC 2018\1282).

<sup>95</sup> Sentencia Audiencia Provincial de Málaga (Sección 4ª) Sentencia núm. 200/2018 de 28 marzo. (JUR 2018\187513).

<sup>96</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno) Sentencia núm. 476/2018 de 20 julio. (RJ\2018\2832).

considera para valorar la indemnización que no hubo una especial difusión de los comentarios publicados dado que no contaba la demandada con muchos seguidores la red social Twitter, ni tenía especial seguimiento en número de visitas, por lo que fija una indemnización de 6.000 euros en concepto de daños morales. En el mismo sentido la SAP de Barcelona núm. 685/2017 de 27 diciembre<sup>97</sup> fija la indemnización por daños morales en 4.000 euros ya que las manifestaciones tuvieron escasa o nula publicidad en cuanto el muro de Facebook del demandado era privado y solo contaba con 238 seguidores.

Será importante al tiempo de valorar la difusión el número de seguidores en la red social y si el perfil queda configurado en abierto o cerrado, que sirve como delimitador del potencial alcance que ha tenido el ilícito, si el autor de las manifestaciones tiene un perfil cerrado y 300 seguidores, sabemos que como mucho, el mensaje ha llegado al conocimiento de esos 300 usuarios. No podrá valorarse de igual manera este último supuesto con el caso de que una cuenta tenga miles de seguidores, aunque sea una cuenta cerrada, puesto que su potencial alcance ya se ha visto multiplicado, de igual manera que si además de contar con miles de seguidores, sea un perfil abierto al resto de usuarios, en tal caso, su difusión es exponencial.

Para estos supuestos tan controvertidos creo que una solución sería valorar en conjunto ambos criterios, por un lado, el número de seguidores y si la cuenta es abierta o cerrada al resto de usuarios, así como atender también al número de interacciones que ha tenido la publicación tomando de base los *me gusta*, *no me gusta*, y comentarios publicados, sobre todo al tiempo de intentar valorar la difusión real de los ilícitos ocasionados en cuentas abiertas o con gran número de seguidores.

También variará la cuantía de la indemnización dependiendo de la valoración que realice el Tribunal con respecto la difusión del medio, considerándolo en abstracto. En este sentido, la SAP de Valladolid núm. 390/2017 de 17 noviembre<sup>98</sup> estima que la publicación del mensaje en un perfil de Facebook, aun siendo un perfil abierto, que ampliaría los potenciales conocedores del mensaje, no es equiparable a la difusión que el mensaje alcanzaría de ser difundido en medios de comunicación como el periódico, radio o televisión, considerados medios de comunicación social. Se sopesa el carácter difuso de

---

<sup>97</sup> Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16ª) Sentencia núm. 685/2017 de 27 diciembre. (AC\2017\1702181).

<sup>98</sup> Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 3ª) Sentencia núm. 390/2017 de 17 noviembre. (AC\2017\1926).

Facebook, el cual «no puede equipararse a otras formas de difusión genérica o en masa, por lo que la indemnización también deberá ajustarse a tales limitaciones del medio empleado<sup>99</sup>». En base a este planteamiento el Tribunal considera adecuada una indemnización de 1.000 euros por daños morales. En cambio, el Tribunal Supremo ha valorado en la STS núm. 50/2017 de 27 enero<sup>100</sup> que la lesión en el derecho al honor de la demandada fue especialmente intensa por la difusión del medio en el que las manifestaciones tuvieron lugar, su cuenta de Twitter, y en este sentido argumenta:

Que su difusión, lejos de quedar restringida al blog, fue fomentada a continuación por la propia demandada mediante un instrumento tan efectivo en los tiempos actuales como las redes sociales (herramientas, como Twitter, en las que se garantiza una acceso ilimitado, sin control, a la información u opinión que se «sube», con la consecuente pérdida de control sobre dichos contenidos por parte de su autor, lo que aumenta exponencialmente la repercusión y consecuentemente, el daño moral derivado de la lesión)<sup>101</sup>.

Atendiendo a la difusión alcanzada por el mensaje por el empleo de la cuenta de Twitter para darle mayor publicidad, el Tribunal Supremo mantiene la indemnización de 18.000 euros, no considerándola ni excesiva ni desproporcionada.

En estos casos creo que es más acertada la concepción del Tribunal Supremo, las redes sociales no deben concebirse como un medio que limite el conocimiento de las infracciones, sino como un medio que fomenta y facilita el conocimiento al mayor número de personas, la difusión ya no queda reducida a quienes leen el periódico, ven el telediario o escuchan la radio, en la actualidad, el mayor exponente de la expansión de información es internet, y más concretamente, las redes sociales, cuya finalidad como se ha expuesto, es subir, compartir y difundir información. Ejemplo de ello es que los medios de comunicación tradicionales en la actualidad cuentan con sus propias plataformas digitales, páginas web y perfiles en redes sociales, no quedando sus contenidos restringidos al ámbito radiofónico, televisivo o escrito, sino que pueden encontrarse online e incluso en ocasiones, los medios tradicionales de comunicación se han hecho eco de los ilícitos que se originan en las redes sociales. Así es el caso de la SAP de Segovia núm. 59/2018 de 8 marzo, predecesora de la STS núm. 201/2019 de 3 abril, valora que

---

<sup>99</sup> Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 3ª) Sentencia núm. 390/2017 de 17 noviembre. (AC\2017\1926) FJ 2.

<sup>100</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 50/2017 de 27 enero. (RJ\2017\369).

<sup>101</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 50/2017 de 27 enero. (RJ\2017\369) FJ 6.

las expresiones vertidas por la concejal sobre el fallecimiento del torero se dieron en un medio que facilitó la amplia difusión (las redes sociales), a nivel nacional, llegando a retransmitirse en la prensa y un programa de radio en el que participó la demandada, a razón de la publicación que realizó en su muro de Facebook. Dentro del criterio de la difusión, habrá de valorarse la repercusión y eco en la sociedad de las manifestaciones y expansión a otros medios de comunicación como circunstancias que afecten a la cuantía de la indemnización por daños morales, debiendo ser superior al haberse aumentado la difusión el ilícito fuera de las redes sociales.

Además de lo expuesto, una de las características propias de las redes sociales que es importante tener en cuenta en la valoración de la difusión, es que se pueden añadir *hashtags* en las publicaciones. Esta opción permite al usuario que busque el nombre de un *hashtag* ver todas las publicaciones que se han subido a la red con dicha referencia. En el supuesto de la SAP de Madrid núm. 339/2015 de 21 octubre<sup>102</sup>, el demandado publicó en su perfil de Twitter y en el muro de Twitter del actor expresiones referentes al consumo de cocaína y le acusaba de mantener relaciones con menores de edad con el *hashtag* #pedófilo, de tal modo que, si un usuario buscara el referido *hashtag* en Twitter, aparecerían los mensajes publicados por el demandado sobre la figura del actor. El Tribunal falla que son unas expresiones vertidas en unos tuits, cuya difusión dentro de la red social conocía el actor, más teniendo en cuenta el número de seguidores que tenían ambos, siendo significativo el uso del *hashtag* #pedófilo, que contribuye a la difusión, siendo identificada la actora dentro de la red social con la simple búsqueda de dichas palabras.

De la jurisprudencia más reciente sobre vulneración al honor en redes sociales cabe destacar la STS núm. 236/2019 de 23 abril<sup>103</sup>, en el caso, el demandante y el demandado, ambos periodistas de profesión y con cierta relevancia pública, mantienen un enfrentamiento con origen en sus opuestas opiniones políticas, que va deteriorando su relación. Tras un incidente vivido en la sección que compartían de un conocido programa de radio, el demandado publica en su cuenta de Twitter que ha sido agredido física y verbalmente en el estudio por el demandante, especificando con empujones y manotazos. De estos mensajes hubo una gran repercusión en medios digitales y dentro de la

---

<sup>102</sup> Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª) Sentencia núm. 339/2015 de 21 octubre. (JUR\2015\306133).

<sup>103</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 236/2019 de 23 abril. (RJ\2019\1376).

plataforma de Twitter, dando lugar a la concepción general de que el demandante era una persona violenta cuando en realidad nunca tuvo lugar ninguna agresión<sup>104</sup>.

Se constata por tanto la existencia de la vulneración al derecho al honor del demandante y se condena al demandado a cesar en la intromisión, a publicar la sentencia en su cuenta de Twitter y en un medio digital de características similares a aquellos que se hicieron eco de los hechos manifestados en los mensajes de Twitter publicados y a indemnizar al demandante el daño moral en 5.000 euros teniendo en cuenta el perjuicio que sufrió en su imagen pública, sin hacer referencia a una indemnización por daños patrimoniales dada la falta de relación de los mensajes publicados con la cancelación del programa en el que colaboraba u otro perjuicio patrimonial.

En el caso de la STS núm. 201/2019 de 3 abril<sup>105</sup> sobre el referido caso de los mensajes publicados en Facebook por la concejal de un Ayuntamiento de Valencia con respecto la muerte de un torero en el ruedo, el mensaje tuvo gran repercusión dentro de la red social y medios de comunicación a nivel nacional dieron eco del mensaje e incluso la demandada llegó a ser entrevistada en un programa de radio nacional sobre estos hechos. Cabe destacar que el Juzgado de Primera Instancia, al que se refiere el Tribunal Supremo, estimó la demanda en base a que consideró que publicar un mensaje de dichas características en un muro de una red social con 300 “*amigos*” supone una gran repercusión, argumenta que las redes sociales no pueden ser un subterfugio donde todo cabe y todo vale. Por todo ello, El Tribunal Supremo declaró que el mensaje publicado en el muro de Facebook de la demandada suponía una intromisión ilegítima en el derecho al honor del fallecido, condenando a la demandada a su retirada, a la publicación de la

---

<sup>104</sup> Quedando probado que lo que ocurrió entre el demandante y el demandado fue una discusión con descalificaciones personales mutuas, pero en ningún caso se dio agresión física alguna. Según el Tribunal ni la libertad de expresión, ni en su caso la libertad de información, amparan la acusación de unos hechos no veraces, en una plataforma pública como Twitter, ratificándolos en medios digitales, según la sentencia de segunda instancia son «manifestaciones inequívocamente ofensivas, hirientes, gratuitas, proferidas con el deliberado propósito de ofender y de que esa ofensa tuviera la mayor repercusión (ofreciendo en redes sociales e Internet una imagen pública del demandado como maltratador, persona violenta, incluso que padecía un desequilibrio)». El Tribunal Supremo ratifica la sentencia de segunda instancia bajo el planteamiento de que ni la Constitución, ni la LO 1/1982 ampara la tergiversación de un comportamiento hasta la imputación de unos hechos falsos para provocar mayor reproche social sobre la persona del demandante.

<sup>105</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 201/2019 de 3 abril. (RJ\2019\1214). En los mensajes publicados se calificaba al torero de asesino y daba a entender que hay un aspecto positivo en su fallecimiento, comentarios que sobrepasan la mera crítica y supone una vulneración en el derecho al honor del fallecido, a su memoria y perturba el dolor de sus familiares.

sentencia en los mismos medios en los que publicó el mensaje y al abono de 7.000 euros a la viuda y padres del torero fallecido en concepto de daños morales sufridos.

En ambas sentencias se condena a la publicación de las sentencias en las cuentas de la red social en las que fueron publicados los mensajes originales, y a la publicación a su costa en los medios en los que también se difundió el mensaje, medida que se contempla en el artículo 9.2.a) de la LO 1/1982 para los supuestos de vulneración al derecho al honor, dice por tanto, «En caso de intromisión en el derecho al honor, el restablecimiento del derecho violado incluirá, (...), la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida.» El aspecto al que se refiere el artículo en cuanto exige al menos la misma difusión que tuvo el mensaje de la intromisión ilegítima no cabe de pleno cuando nos referimos a las vulneraciones con origen en las redes sociales. Podrá publicarse la sentencia y el contenido del fallo en el perfil del infractor en la red social, y como en los casos expuestos, en los que tiene eco fuera de las redes sociales, en medios de las características a aquellos en los que también se difundió, pero ello no garantiza que alcance la misma difusión pública que el mensaje inicialmente publicado ya que en las redes sociales la información la difunden los propios usuarios. Si bien es una medida proporcional y efectivamente orientada a intentar darle la misma divulgación que tuvo el ilícito en las vulneraciones que tengan lugar en las redes sociales, por las características propias que presenta en cuanto a la difusión, puede que no se termine de cumplir con la exigencia del artículo 9.2.a) LO 1/1982.

Pese a dichas dificultades, la STS 689/2019 de 18 de diciembre<sup>106</sup>, en un intento de ampliar la difusión del fallo, se condena al medio radiofónico que durante días debatió sobre los mensajes difamatorios ayudando a su divulgación, a la lectura de la sentencia con la misma reproducción que se dio a los contenidos difamatorios, al comienzo y al final del espacio radiofónico y durante un día distinto en un periodo de cinco semanas.

Sobre la cuantía de las indemnizaciones el Tribunal Supremo se ha pronunciado numerosas veces en cuanto no se pueden admitir indemnizaciones simbólicas en los casos en los que hay una efectiva intromisión ilegítima en el derecho al honor, un derecho fundamental protegido por la Constitución. Una indemnización de carácter simbólico

---

<sup>106</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 689/2019 de 18 de diciembre. (VLEX-834927177) AH 1.



reduciría su protección a un acto «meramente ritual, incompatible con el contenido de los artículos 9.1, 1.1 y 53.2 CE» y no sería compatible con la exigencia de obtener una reparación consecuente al daño sufrido.

La determinación de las indemnizaciones corresponde a los Tribunales de Primera Instancia en las demandas relacionadas con intromisiones ilegítimas en el derecho al honor y resarcimiento de daños morales, sin que generalmente su fijación pueda ser modificada por vía de recurso, salvo, como ha fijado la jurisprudencia<sup>107</sup>, casos excepcionales en los que concurra desproporción, error notorio o arbitrariedad, o aquellos casos en los que no se han tenido en cuenta los parámetros de valoración del artículo 9.3 de la LO 1/1982.

Un caso reciente que lo ejemplifica es el de la STS 689/2019 de 18 de diciembre<sup>108</sup>. El Juzgado de Primera Instancia fijó una indemnización total de 45.000 euros por unas noticias y opiniones al respecto que realizó un periodista en distintos medios de comunicación de circunscripción canaria sobre el juez instructor de una causa de corrupción. Dicha indemnización fue aumentada por la Audiencia Provincial hasta los 160.000 euros totales, aun basándose en los mismos argumentos que esgrimía el Juzgado de Primera Instancia, multiplica casi por cuatro la cuantía de la indemnización. El Tribunal Supremo admite la demanda y la casa por desproporción en la cuantía. De una parte, porque consideró que algunas de las manifestaciones enjuiciadas sí quedaban amparadas en los derechos a la libertad de expresión e información, y de otra, que atendiendo a la limitada difusión de los artículos en prensa y emisiones en programas radiofónicos, reducido al territorio canario, y valorando a tal fin «que no es razonable pensar que la posibilidad de acceder a buena parte de las mismas por Internet haya supuesto una extensión significativa de las mismas fuera de ese ámbito», hace que considere la indemnización de 45.000 euros fijada por el Juzgado de Primera Instancia y ajustada al contenido del artículo 9.3 LO 1/1982<sup>109</sup>.

---

<sup>107</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno) Sentencia núm. 551/2017 de 11 octubre. (RJ\2017\4283) FJ 4, referenciando en este aspecto las Sentencias 435/2014 de 17 de julio (RJ 2014, 4428); 666/2014 de 27 de noviembre. (RJ 2014, 6031); 29/2015 de 2 de febrero (RJ 2015, 488); 123/2015 de 4 de marzo. (RJ 2015, 1095); 232/2016 de 8 de abril; 337/2016 de 20 de mayo; y 386/2016 de 7 de junio. (RJ 2016, 2343).

<sup>108</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 689/2019 de 18 de diciembre. (VLEX-834927177).

<sup>109</sup> Aclara el Tribunal su postura frente a posibles objeciones que pudieran realizar las partes por acogerse a la cuantía indemnizatoria del Juzgado de Primera Instancia tras haber considerado que eran legítimas parte de las manifestaciones vertidas por el demandado argumentando que «debe recordarse que el

#### 4.3.REQUISITO DE LA PRUEBA EN LOS DAÑOS PATRIMONIALES

Sobre los daños y perjuicios patrimoniales la jurisprudencia no sostiene la presunción del daño en la misma medida que en los daños morales. La STS núm. 117/2011 de 3 marzo<sup>110</sup> expone en su Fundamento Jurídico sexto que «En virtud de esta presunción legal (del artículo 9.3 de la LO 1/1982) se elimina la necesidad de acreditar el daño moral (no el patrimonial, como precisa la STS 1ª 212/2006, 7-3) en los casos de intromisión ilegítima en el derecho al honor.» No se aplica una presunción sobre los daños patrimoniales en cuanto:

Las ofensas al honor, a la intimidad y a la propia imagen, por la propia naturaleza de estos derechos, no son susceptibles de afectar directamente a los bienes patrimoniales de la persona ofendida, por lo que la intromisión ilegítima en ellos no será causa de daños patrimoniales, teniendo por tales los que producen un daño valorable en dinero sobre bienes patrimoniales del perjudicado.<sup>111</sup>

La mera vulneración al derecho al honor del ofendido no implica necesariamente la existencia de un daño patrimonial, por afectar estas vulneraciones al aspecto interno de la persona, su fama y reputación, por lo que no se le concede ni presunción *iuris et de iure*, ni presunción *iuris tantum*, sino que los daños patrimoniales que pudiesen derivar de la vulneración al derecho al honor deberán ser probados, en base a la teoría general de que no hay responsabilidad sin daño.

En la ya citada STS núm. 236/2019 de 23 abril<sup>112</sup> sobre la falsa agresión de un periodista a otro anunciada en Twitter, el Tribunal impuso una indemnización por los daños morales sufridos a consecuencia de la vulneración a al derecho al honor del demandante, únicamente repara los daños causados a su imagen pública porque no pudo acreditarse

---

pronunciamiento que es casado en nuestra sentencia es el contenido en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial. Una vez declarado que la indemnización fijada por esta es notoriamente desproporcionada a las circunstancias del caso, consideramos que las cuantías fijadas en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia son adecuadas, incluso con la nueva delimitación de cuáles fueron las manifestaciones que constituyeron una intromisión ilegítima en el honor del demandante y cuáles no, dada la gravedad de las que continúan considerándose ilegítimas.» *Ibidem*, FJ 8.9.

<sup>110</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 117/2011 de 3 marzo. (RJ\2011\2626), FJ 6.

<sup>111</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 872/2008 de 25 septiembre. (RJ\2008\5573) FJ 1.

<sup>112</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 236/2019 de 23 abril. (RJ\2019\1376).

que los mensajes ofensivos tuviesen relación alguna con la posterior cancelación del programa radiofónico en el que ambos participaban como colaboradores.

En la SAP de Barcelona núm. 685/2017 de 27 diciembre<sup>113</sup> el demandado envió un correo electrónico a ocho familiares y publicó en su muro privado de en Facebook una carta en la que se emplean insultos y graves acusaciones sobre el demandante, abogado de profesión, como que «golpeó a su propio padre», que «pretendía matar a los amigos de un hermano» o que «había robado a dos manos». El demandante alega que, tras la publicación de dicha carta, 75 amigos de la red social dejaron de serlo. El actor valora que cada uno de ellos era un potencial cliente y habrían solicitado una hora de sus servicios, reclama por ello 6.750 euros como daños patrimoniales.

La Audiencia resuelve que se trata de conjeturas, «sin apoyo probatorio». El demandante debería haber acreditado que esa pérdida de contactos en Facebook llevaba consigo, de forma razonable, la pérdida de clientes y por ende la causación de un daño patrimonial, no habiendo tenido lugar dicha actividad probatoria se desestima la indemnización solicitada por daños patrimoniales.

## **5. EL SUJETO RESPONSABLE**

La responsabilidad civil opera como medio para reparar o compensar el daño causado, para ello es necesario determinar quién es el responsable del daño. En la actualidad no hay una normativa específica que regule la responsabilidad por los daños ocasionados dentro de las redes sociales, en parte debido a su rápido progreso y a la dificultad de determinar quién es el responsable ya que en muchas ocasiones podemos encontrarnos con que el usuario infractor actúa con un perfil falso u anónimo lo que nos hace plantear la cuestión de en qué casos la red social en la que tiene lugar el daño puede ser considerada como responsable, como prestadora del servicio.

---

<sup>113</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16ª) Sentencia núm. 685/2017 de 27 diciembre. (AC\2017\1702)

## 5.1. LA RED SOCIAL COMO RESPONSABLE

### 5.1.1. NORMATIVA APLICABLE

Dentro del marco normativo de la Unión Europea encontramos la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)<sup>114</sup> incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico<sup>115</sup>.

La Directiva 2000/31/CE no define lo que debe entenderse por «servicios de la información», sino que remite a la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, codificada por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2015/1535 de 9 de septiembre de 2015 por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (versión codificada).

En esta última, su artículo primero apartado primero recoge la definición de servicio como:

Todo servicio de la sociedad de la información, es decir, todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios.

Como complemento a esta definición acudimos al considerando 18 de la Directiva 2000/31/CE que además considera:

Los servicios de la sociedad de la información no se limitan únicamente a servicios que dan lugar a la contratación en línea, sino también, en la medida en que representan una actividad económica, son extensivos a servicios no remunerados por sus destinatarios, como aquéllos que consisten en ofrecer información en línea o comunicaciones comerciales, o los que ofrecen instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos. Los servicios de la sociedad de la información cubren también servicios consistentes en

---

<sup>114</sup> DOCE núm. 178, de 17 de julio de 2000, pp. 1 a 16 (DOUE-L-2000-81295).

<sup>115</sup> BOE núm. 166, de 12 de julio de 2002 (BOE-A-2002-13758)

transmitir información a través de una red de comunicación, o albergar información facilitada por el destinatario del servicio.

En la normativa española se recoge en la exposición de motivos un concepto más amplio de «servicios de la sociedad de la información» en cuanto:

Engloba, además de la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de información por dicho medio (como el que efectúan los periódicos o revistas que pueden encontrarse en la red), las actividades de intermediación relativas a la provisión de acceso a la red, a la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, a la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios (...), siempre que represente una actividad económica para el prestador.

#### 5.1.2. ¿SON LAS REDES SOCIALES SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN?

Según lo expuesto, no cabe duda de que las redes sociales son servicios prestados a distancia, por vía electrónica y a petición de un destinatario, que en este caso sería la persona que crea un usuario o perfil dentro de la red social on-line, el aspecto quizá más dudoso sería la remuneración o no del servicio prestado.

Siguiendo el Considerando 18 de la Directiva 2000/31/CE los servicios de la sociedad de la información se extienden a aquellos servicios no remunerados por sus destinatarios que ofrecen información en línea y el recopilado de datos proporcionados por los usuarios del servicio. Con base a este precepto podríamos deducir que las redes sociales sí se encontrarían dentro de la definición de «servicios de la sociedad de la información» ya que éstas no reciben ingresos directos de sus usuarios, pero los obtienen indirectamente a partir de la publicidad que les muestran<sup>116</sup>, por lo que son servicios remunerados, que

---

<sup>116</sup> Así queda reflejado en los términos de uso de Facebook «En lugar de pagar por usar Facebook y el resto de los productos y servicios que ofrecemos, al usar los Productos de Facebook que se incluyen en estas Condiciones, aceptas que podamos mostrarte anuncios de las empresas y organizaciones que nos pagan por promocionarse dentro y fuera de los Productos de las empresas de Facebook. Usamos tus datos personales, como la información sobre tu actividad y tus intereses, para mostrarte aquella publicidad que pueda resultarte más relevante.» <https://es-es.facebook.com/legal/terms> (Consultado el 20 de enero de 2020). Y en Twitter «En consideración a Twitter y al acceso y uso que le concede de sus Servicios, usted accede a

ofrecen información en línea, transmiten información a través de una red de comunicación y almacenan información aportada por el destinatario del servicio. Sin embargo, la aplicación de dicha normativa, por su ambigüedad en el texto<sup>117</sup> y la novedad que supone en el terreno de las redes sociales, en ocasiones es conflictiva, incluido en el plano jurisprudencial, como bien desarrolla PEGUERA POCH<sup>118</sup>, y aunque la doctrina está de acuerdo en su aplicabilidad en los asuntos relativos a las redes sociales<sup>119</sup>, algunos sostienen que existen motivos para dudarlo<sup>120</sup>.

Como respuesta a su aplicación en los casos de redes sociales TJUE se pronunció en la Sentencia Caso Sabam contra Netlog<sup>121</sup> sobre la aplicación de la Directiva 2000/31/CE concluyendo que Netlog es una red social en línea<sup>122</sup> en la que cada persona que se registra abre un perfil personal que completa con sus datos personales, y como tal «almacena en sus servidores información facilitada por usuarios de dicha plataforma, relativa a su perfil, y que de este modo es un prestador de servicios de alojamiento de datos en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2000/31.»

---

que Twitter y sus proveedores y socios puedan emplazar publicidad en los Servicios o publicidad relacionada con el contenido o información mostrados de los Servicios que haya enviado usted o que hayan enviado otros.» <https://twitter.com/es/tos> (Consultado el 20 de enero de 2020).

<sup>117</sup> Para PEGUERA POCH. S, la normativa intenta «englobar supuestos muy heterogéneos bajo una misma categoría, llamada además a comprender también una pluralidad de servicios futuros, y por tanto desconocidos en el momento de elaborar la definición. Dicho intento resulta ciertamente problemático.» En «Capítulo V. El sistema de exclusiones de responsabilidad en la Directiva sobre el comercio electrónico y en la Ley de servicios a la sociedad de la información», en *La exclusión de la responsabilidad de los intermediarios de Internet*, Biblioteca Comares De Ciencia Jurídica Derecho De La Sociedad De La Información, Dykinson, Madrid, 2007 p. 210.

<sup>118</sup> PEGUERA POCH, M., ««Sólo sé que no sé nada (efectivamente)»: la apreciación del conocimiento efectivo y otros problemas en la aplicación judicial de la LSSI», en *IDP: Revista de Internet, Derecho y Política*, nº 5, 2007.

<sup>119</sup> PEGUERA POCH, M ««Sólo sé que no sé nada...» Op.Cit, RUBÍ PUIG, A., «Derecho al honor online y responsabilidad civil del ISPs», en *InDret, Revista para el Análisis del Derecho*, InDret 4/2010, Barcelona, 2010, ATIENZA NAVARRO, M.L., Capítulo IX. La responsabilidad civil por los daños producidos por las intromisiones ilegítimas en el derecho al honor. En: *Derecho al Honor: Tutela Constitucional, Responsabilidad Civil y Otras Cuestiones*, Aranzadi, 2015.

<sup>120</sup> SOLER PRESAS, A., «Am I in Facebook?», en *InDret revista para el análisis del derecho*, InDret 3/2011, 2011.

<sup>121</sup> Caso Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) contra Netlog NV, Sentencia de 26 de febrero de 2012 (TJCE 2012/27).

<sup>122</sup> «16 Netlog explota una plataforma de red social en línea en la que cada persona que se registra recibe un espacio personal denominado «perfil» que el propio usuario puede rellenar y al cual se puede acceder en todo el mundo.

17 Esta plataforma, que es diariamente utilizada por decenas de millones de personas, tiene por función principal crear comunidades virtuales a través de las cuales esas personas pueden comunicar entre ellas y establecer de ese modo amistades. En su perfil, los usuarios pueden abrir un diario, indicar sus aficiones y sus preferencias, mostrar a sus amigos, mostrar fotos personales o publicar fragmentos de vídeos.»

Dentro a su vez de los servicios a la sociedad de la información se encuentran los servicios de intermediación. La Directiva 2000/31/CE no concreta qué se entiende por servicios de intermediación, pero se definen en la Ley 34/2002 como:

Servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información. Son servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet.

Por ende, las redes sociales se encuadrarían, dentro de los servicios a la sociedad de la información, en los servicios de intermediación, en cuanto almacena los datos aportados por sus usuarios y permite su búsqueda, acceso, e interacción por parte del resto de usuarios de la red social, actuando el servicio prestado por la red social como intermediario en el acceso a la información publicada.

#### 5.1.3. TRATAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD EN LA DIRECTIVA 2000/31/CE Y LA LEY 34/2002

La Directiva 2000/31/CE aplica su sección cuarta a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios, de los artículos 12 a 15. Los artículos 12 a 14 comienzan todos ellos en su apartado primero no considerando al prestador de servicios responsable, para desarrollar en los siguientes puntos cuando los Estados Miembros podrán considerar responsable al prestador de servicios.

Del articulado destinado al desarrollo de la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación por la Directiva 2000/31/CE el que se ajusta al concepto de las redes sociales es el artículo 14, el cual dispone:

1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:

- a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que,
- b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

Como norma general no se considera responsable a la red social por el contenido subido en ella, con dos excepciones, cuando no haya tenido conocimiento efectivo o cuando de haberlo tenido haya actuado eliminando dicho contenido. Ello se basa en el artículo 15 de la propia Directiva 2000/31/CE que exime a los prestadores de servicios de la obligación general de supervisión de sus contenidos, lo que incluye la no obligación siquiera de realizar búsquedas activas con la finalidad de buscar contenidos ilícitos que hayan podido ser compartidos o almacenados, medida comprensible teniendo en cuenta lo que supondría la obligación de control para estos servicios teniendo en cuenta toda la información que se sube, almacena y comparte cada día. A modo ejemplificativo, Facebook cuenta con más de dos mil millones de usuarios, Instagram mil millones, Twitter trescientos treinta millones y otras plataformas como YouTube, a la que podríamos considerar no como una red social pero sí dentro de los denominados «servicios de la sociedad de la información», cuenta con mil novecientos millones de usuarios<sup>123</sup>. Aunque muchas de estas redes sociales tienen sus propias normas de uso que prohíben su utilización para la comisión de conductas ilícitas y aplican sistemas internos de control<sup>124</sup>, se podría considerar desproporcionado la implantación de una

---

<sup>123</sup> HOOTSUITE Y WE ARE SOCIAL, “Informe Digital 2019 reports”, <https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates> (consultado el 3 de diciembre de 2019).

<sup>124</sup> En el caso de Twitter se ha creado un apartado de «Reglas de Twitter» en el que se recogen una serie de comportamientos prohibidos dentro de la red social y de tener lugar la propia red social puede adoptar medidas como limitar la visibilidad del tweet, solicitar su eliminación, ocultar el tweet mientras se espera a su eliminación, y como medidas más restrictivas, puede suspender de forma permanente una cuenta. Estas medidas también pueden ser adoptadas cuando medie un requerimiento válido exigido por una entidad autorizada de un país. <https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-rules> y <https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/enforcement-options> (Consultado el 5 de noviembre de 2019).

Facebook incluye en sus Términos «Qué puedes hacer y qué puedes compartir en Facebook» en el que manifiesta «Queremos que la gente use Facebook para expresarse y compartir contenido que le resulte relevante, pero no a costa de la seguridad y el bienestar de otras personas ni de la integridad de nuestra comunidad.» y como acciones ante dichas conductas sostiene que «Si determinamos que has infringido nuestras condiciones o políticas, especialmente nuestras Normas comunitarias, de manera notoria o grave, o en reiteradas ocasiones, es posible que suspendamos o inhabilitemos definitivamente tu cuenta. También es posible que lo hagamos si infringes reiteradamente los derechos de propiedad intelectual de otras personas o si nos vemos obligados a ello por motivos legales.» <https://es-es.facebook.com/legal/terms> (consultado el 5 de noviembre de 2019).



obligatoriedad de control por parte de los «servicios de la sociedad de la información», o en concreto, a las redes sociales, de todos los contenidos que se publiquen en ellas.

En la Ley 34/2002 dedica dentro del Capítulo II, sobre las obligaciones y régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, la Sección segunda al régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de intermediación, del artículo 13 a 17.

En su artículo 16, en consonancia con el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE señala:

1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:
  - a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o
  - b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

Hasta aquí su contenido es asimilable al de la Directiva 2000/31/CE, aunque nuestra normativa lo completa en el sentido de que:

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.

Esta normativa aplica un régimen de responsabilidad extracontractual de carácter subjetivo<sup>125</sup> y carácter horizontal<sup>126</sup>. Si el sistema objetivo de imputación de la responsabilidad implica la reparación del daño sin la necesidad de apreciación de culpa o negligencia, tanto la Directiva 2000/31/CE como la Ley 34/2002 exigen el conocimiento efectivo y la inactividad como criterios de imputación de la responsabilidad, es decir,

---

<sup>125</sup> BUSTO LAGO, J. M., “La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de intermediación en la sociedad de la información”, *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 54, 2002.

<sup>126</sup> PEGUERA POCH, M: “Capítulo V. El sistema de exclusiones de responsabilidad...” Op. Cit. p. 205.

exigen culpa o negligencia en el prestador de servicios, o en nuestro caso, en la red social para poder ser considerado responsable.

Dicho planteamiento es al que se acogen las mismas redes sociales, así Facebook en sus Condiciones del Servicio incluye un apartado de «Limitación de Responsabilidad» donde dispone que:

Ninguna de las disposiciones de las presentes Condiciones tiene como finalidad eximirnos de responsabilidad ni limitarla en casos de defunción, lesiones personales o representación fraudulenta derivados de una negligencia por nuestra parte, ni tampoco afectar a tus derechos legales.

Actuaremos con diligencia profesional a la hora de ofrecerte nuestros Productos y servicios y de mantener un entorno seguro y libre de errores. Siempre y cuando hayamos actuado con diligencia profesional, no nos hacemos responsables de las pérdidas no provocadas por nuestro incumplimiento de estas Condiciones o por nuestras acciones; las pérdidas que ni nosotros ni tú podamos prever en el momento de la entrada en vigor de estas Condiciones, ni los acontecimientos que no podemos controlar<sup>127</sup>.

#### 5.1.4. EL CONOCIMIENTO EFECTIVO EN LA JURISPRUDENCIA

El artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE solo menciona que el prestador de servicios podrá tener la consideración de responsable cuando haya tenido conocimiento efectivo de la ilicitud de los datos que almacena, sin mayor especificación en su articulado. Sin embargo, la Ley 34/2002, en el segundo párrafo de su artículo 16.1.b) añade como supuestos en los que se considerará que existe conocimiento efectivo los casos en los que: i) se hayan retirado los datos o se haya imposibilitado su acceso, ii) un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos almacenados y fuese conocido por el prestador, iii) se haya declarado la existencia de lesión, iv) otros modos de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. Este último aspecto solo está recogido en la normativa española y ha traído consigo un desarrollo jurisprudencial sobre qué hechos o circunstancias serán causantes de la imputación de la responsabilidad al prestador de servicios.

---

<sup>127</sup> <https://es-es.facebook.com/legal/terms> (consultado el 10 de enero de 2020).

Nuestra jurisprudencia no se ha pronunciado expresamente sobre la responsabilidad de las redes sociales por las vulneraciones al derecho al honor que tengan lugar dentro de estas, no obstante, al ser consideradas servicios a la sociedad de la información y serles aplicable tanto la Directiva 2000/31/CE, como la Ley 34/2002 sobre las que hay asentada doctrina jurisprudencial, los criterios establecidos operarán analógicamente sobre las redes sociales.

Uno de los primeros casos sobre los que se pronunció el Tribunal Supremo sobre la responsabilidad de los prestadores de servicios de la información fue en el caso de la demanda interpuesta por la SGAE por vulneración a su derecho al honor contra la Asociación de Internautas<sup>128</sup>. Esta asociación prestaba servicios de la sociedad de información, entre los que se encontraba el alojamiento de datos a sus asociados por medio de su dirección en la red «www.internautas.org» y en dicha página se encontraban las direcciones web «www.putasgae.org» y «www.antisgae.internautas.org» y a su vez dentro de las mismas se manifestaron expresiones contra los miembros de la SGAE como «matones a sueldo...», «sanguijuelas sgaeras...», «pandillas de mafiosos...», «putos chorizos...», y contra la propia Sociedad General de Autores y Editores con opiniones como «putasgae...», «la SGAE tiene más cosas que callar que para contar y su opacidad no le permite predicar con el ejemplo...», expresiones susceptibles de vulnerar su derecho al honor.

En este caso, la SGAE demandó a la prestadora de servicios, a la Asociación de Internautas, en vez de a los generadores del contenido, por lo que el Tribunal debió valorar si concurrían los casos de exoneración de responsabilidad, es decir, que no tuviera conocimiento de los datos que se almacenan en sus servidores y que hubiese ausencia de vínculos de subordinación, dependencia o control entre la recurrente y los proveedores de contenidos<sup>129</sup>.

Entrando a valorar el conocimiento efectivo, el Tribunal amplía la interpretación que debe darse del artículo 16 de la Ley 34/2002 en cuanto éste, en su apartado primero b), *in fine*, referencia a la expresión «sin perjuicio de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse», sobre este aspecto se entiende igual el conocimiento efectivo que

---

<sup>128</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 773/2009 de 9 diciembre. (RJ\2010\131), AH 1.

<sup>129</sup> LÓPEZ DE LA PEÑA SALDÍAS. J.F., “Libertad de expresión e internet. Responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. El caso “putasgae”, en *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 3/2010, 2010, p. 5.

pueda obtener el prestador de servicio «a partir de hechos o circunstancias aptos para posibilitar, aunque mediatamente o por inferencias lógicas al alcance de cualquiera, una efectiva aprehensión de la realidad de que se trate.<sup>130</sup>»

Con esta base el Tribunal Supremo se acoge al planteamiento de la sentencia apelada y consideró que el dominio web «www.putasgae.org» y «www.antisgae.internautas.org», con un evidente carácter insultante hacia la institución, constituía un medio adecuado, en concreto, *ex re ipsa*, para poder conocer por el prestador de servicios que los datos alojados en dichos dominios serían de carácter injurioso, por lo que efectivamente la Asociación de Internautas actuó con falta de diligencia que exige el artículo 16.1 de la Ley 34/2002<sup>131</sup>.

En el mismo sentido se pronuncia en el caso de la STS núm. 72/2011 de 10 febrero<sup>132</sup>, en cuanto la norma armonizadora exige el conocimiento efectivo, pero el prestador de servicios no puede restringir los medios para poder alcanzar dicho conocimiento. Concluye que cuando la ilicitud de los datos almacenados es patente y evidente por sí sola, no se requiere para imputar la responsabilidad al prestador de servicios que medie una resolución judicial declarando la vulneración al derecho al honor del demandante por comentarios o manifestaciones vertidas dentro del servidor, pues disponía de los medios suficientes para haberlo conocido con anterioridad, dada la evidencia de la ilicitud y supondría un perjuicio para el afectado que debería esperar meses o años hasta poder ver reparado su derecho<sup>133</sup>.

Según ha evolucionado la jurisprudencia se han sumado criterios en la identificación del conocimiento efectivo, así en la STS núm. 805/2013 de 7 enero<sup>134</sup> las expresiones se encuentran dentro de un foro en el que existen unos moderadores que deben intervenir en

---

<sup>130</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 773/2009 de 9 diciembre. (RJ\2010\131), FJ 4.

<sup>131</sup> CAVANILLAS MÚGICA, S. en *Responsabilidades de los proveedores de información en internet* Biblioteca Comares De Ciencia Jurídica Derecho De La Sociedad De La Información, Dykinson, Madrid, 2007, p. 31, opina por el contrario, «Que la temática de un sitio web sea crítica hacia una persona o institución no es indicador suficiente de un conocimiento efectivo respecto de intervenciones de terceros que puedan llevar su espíritu crítico más allá de la frontera de lo permitido.» Reduciendo su aplicación a las intervenciones en foros o blogs cuyas intervenciones fueran necesariamente ilícitos como en el caso de que su finalidad fuera la revelación de secretos industriales o comisión de delitos.

<sup>132</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 72/2011 de 10 febrero. (RJ\2011\313), FJ 4.

<sup>133</sup> En este mismo sentido RUBÍ PUIG, A., “Derecho al honor online y responsabilidad civil del ISPs”, en *InDret, Revista para el Análisis del Derecho*, InDret 4/2010, Barcelona, 2010.

<sup>134</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 805/2013 de 7 enero. (RJ\2014\773), FJ 4.

el caso de que tengan lugar insultos o expresiones agresivas o violentas dentro del debate, por lo que el Tribunal resuelve que el prestador de servicios tuvo conocimiento efectivo en cuanto contaba dentro de sus páginas web con sistemas de control, detección y moderación de su contenido, así que, o no funcionaron correctamente o no fueron activados. En el caso, el foro estaba siendo atacado por un «Troll<sup>135</sup>», situación conocida por el prestador que no reaccionó pese a tener conocimiento de la información que se estaba publicando en sus foros<sup>136</sup>.

Además, el Tribunal añade, con respecto al no requerimiento de declaración judicial de la ilicitud al que se aluce en las referenciadas sentencias:

No obsta a lo anterior el que no haya precedido ninguna resolución judicial que declarase la ilicitud del contenido de las manifestaciones, pues es claro que, en el actual mundo de las telecomunicaciones, caracterizado por la facilidad y rapidez de difusión de los datos, remitir al perjudicado a la previa obtención de una declaración formal de ilicitud, cuando la intromisión en el derecho fundamental es tan notoria como en el caso que nos ocupa - en el que se emplean expresiones tales como "hijos de puta, estafador, ladrón..." y graves amenazas hacia la persona del demandante - multiplicaría los perjuicios ocasionados, hasta el extremo de que, cuando obtuviese respuesta a la tutela judicial pretendida, aquellos perjuicios pudieran ser ya irreparables. Además de lo expuesto, tampoco consta que la entidad demandada actuase con diligencia para retirar los datos o impedir el acceso a ellos, (...) pues, al menos, desde que fue emplazada tuvo conocimiento de todo (...).

El caso de la STS núm. 128/2013 de 26 febrero<sup>137</sup> se refiere al control que deben tener los prestadores de servicios cuando se tratan de las expresiones que se publican en un

---

<sup>135</sup> La SAP de Barcelona (Sección 14ª) Sentencia núm. 707/2010 de 29 noviembre. (AC\2011\14) que da lugar por medio de recurso a la analizada sentencia del Tribunal Supremo, en su FJ 3 define «Troll» como aquel que «con diferentes formas, pretende provocar controversia sobre un tema o contra alguien mediante expresiones u opiniones groseras, insultantes, ofensivas e incluso amenazantes de considerable gravedad.»

<sup>136</sup> En este caso, Evelio era propietario de una empresa de electrónica (Aiguamolls Electro- Informática), e interpone una demanda en defensa a su derecho al honor contra Meristation Magazine, S.L., por las expresiones que se dan en la web [www.meristation.com](http://www.meristation.com), en la que se publican comentarios como «Aiguamolls también me quiere estafar, esos hijos de puta no pueden quedar impunes, leer los e-mails que te manda este sinvergüenza, menudo sinvergüenza y desgraciado, a este timador le metan un paquete que se cague, dale bien a esos cabrones, serán ladrones, como se puede estafar de esta manera, hay que acabar con esta gentuza, estafadores, ladrón, atracador, chorizo, me pongo en la piel de la víctima y hubiere ido directamente a la tienda a matar a hostias al Evelio ese, tenían que ponerse de acuerdo la gente estafada y hacerle la cirugía facial a golpes entre todos, yo me iría a Sant Cugat y le empotraba a ese cerdo el ordenador en la cabeza, que nadie más le compre a ese timador de los Aiguamolls, son simplemente estafadores, a ver si le dan por el culo al tal Evelio y le meten un puro que le salga por los ojos, queremos pan, queremos vino, querernos al Evelio colgao de un pino.»

<sup>137</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 128/2013 de 26 febrero. (RJ\2013\2580), FJ 4.

En el caso de denuncia al foro [www.economista.com](http://www.economista.com) por unos comentarios contenidos en la noticia «los usuarios de Facebook jubilarán virtualmente a Cebollero», entre ellos pueden destacarse «este tío es un sinvergüenza y un mercenario», «este sarnoso se comerá sus propias mierdas, o si a ese cerdo o a sus

foro, como se ha desarrollado en el párrafo que precede, con el añadido de que el demandante intentó contactar con el titular de la página para que fueran eliminados dichos comentarios y éste lo impidió, por lo que el Tribunal resolvió que también se incumple con la debida diligencia cuando se rehúsa, impide o dificulta la comunicación con el afectado impidiéndole «así conseguir la interrupción de la difusión de los comentarios lesivos y ofensivos para su persona facilitando su prolongación en el tiempo» siguiendo el mismo planteamiento expuesto previamente, en cuanto el prestador del servicio no puede restringir los medios para obtener el conocimiento efectivo.

Con otros matices se han pronunciado la Audiencia Provincial de Madrid sobre la emisión de burofax o comunicación en la SAP de Madrid núm. 468/2010 de 8 noviembre<sup>138</sup>. La peculiaridad se encuentra en cuanto el demandante notifica un burofax a la demandada en el que manifiesta que la noticia que se ha publicado le desagrada y considera injuriosos comentarios publicados en la misma, por lo que solicita su retirada, sin más especificación. A falta de mayores precisiones la demandada, tras recibir el burofax procede, bajo su criterio, a eliminar los comentarios que considera insultantes y vejatorios, entre ellos algunos con expresiones como «gilipollas», «retrasado mental», «comemierdas». Debido a esta actuación la Audiencia exime de responsabilidad a la demandada en cuanto no se le puede exigir que se eliminen los comentarios que el demandante entiende injuriosos o insultantes con la emisión de un burofax impreciso. En síntesis, habiendo tenido conocimiento efectivo del ilícito, se actuó con la diligencia debida retirando aquellos comentarios insultantes y vejatorios, con independencia que no coincidiera en la totalidad con los que le gustaría a la parte actora, cumpliendo con los contenidos del artículo 16.1 de la Ley 34/2002.

Los diversos modos de obtener «conocimiento efectivo» no son cerrados, sino que se han ido ampliando según se desarrolla más jurisprudencia sobre la responsabilidad de los servicios de la sociedad de la información. Esto es debido a que debe atenderse al caso concreto, que siempre será distinto ya que depende de la multitud de factores que se

---

patéticos esbirros, lo que verdaderamente es un fascista, este tío es un indeseable, a ver si alguien se anima y lo hecha de España por apátrida, lo mejor es darle una hostia y cuando lo veas por la calle, el problema de este consumidor de clínicas de estética, su obra musical e intelectual es una mierda, Cebollero me parece un fantasma putrefacto... no ser un parásito como es y tratar de vivir del cuento, me parece muy bien y si le fusilan de verdad, mejor, deberían fusilarlo a él, que se joda puto cocainómano de mierda, ha sido un yonqui, muérete ya, si este Cebollero hubiese salido más tonto no nace.»

<sup>138</sup> Audiencia Provincial de Madrid (Sección 8ª) Sentencia núm. 468/2010 de 8 noviembre. (AC\2010\2096), FJ 2.2.

presentan en los servicios de la sociedad de la información y las particularidades que, a su vez, se encuentran en cada uno de ellos, por lo que cabe esperar que los criterios de obtención de «conocimiento efectivo» serán ampliados cuando la jurisprudencia entre a desarrollar la responsabilidad de las redes sociales ahondando en sus particularidades.

## 5.2. EL USUARIO COMO RESPONSABLE

Dentro de los responsables debe hacerse igualmente mención a la figura del usuario y los supuestos en los que podrá incurrir en responsabilidad. Ates de entrar a su desarrollo cabe mencionar que a éstos no se les aplica la Directiva 2000/31/CE y, por tanto, tampoco la Ley 34/2002, ya que dicha normativa no regula la responsabilidad de los prestadores finales del servicio, por lo que se les aplicará las normas generales de responsabilidad civil, administrativa o penal<sup>139</sup>. Centrándose este trabajo en el estudio de la responsabilidad civil por la vulneración al derecho al honor se aplicará la tan traída LO 1/1982.

### i) El usuario como autor de la publicación origen del ilícito

Es el supuesto más habitual que menos problemática presenta y como se observa por lo desarrollado hasta este punto, el más desarrollado en la jurisprudencia. Aquí se encuadraría cuando el usuario que sube a la red social el mensaje con contenido ilícito, quien publica y redacta las expresiones o manifestaciones que vulneran el derecho al honor, es el autor de la publicación por lo que responde como autor material del daño, es responsable por hecho propio. Así es el caso de las sentencias desarrolladas con índices anteriores como las STS núm. 236/2019 de 23 abril<sup>140</sup>, STS núm. 201/2019 de 3 abril<sup>141</sup> y STS núm. 50/2017 de 27 enero<sup>142</sup>.

En estos supuestos, a falta de una normativa más específica que regule su responsabilidad, responde el usuario autor de las manifestaciones en aplicación de los preceptos

---

<sup>139</sup> CAVANILLAS MÚGICA, S, [et.Al]: *Responsabilidades De Los Proveedores De Información En Internet*, Op. Citp., p. 11.

<sup>140</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 236/2019 de 23 abril. (RJ\2019\1376).

<sup>141</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 201/2019 de 3 abril. (RJ\2019\1214).

<sup>142</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 50/2017 de 27 enero. (RJ\2017\369).

desarrollados de la LO 1/1982, en concreto, por el artículo séptimo según el cual se considerará responsable por intromisión ilegítima en el derecho al honor a quien impute hechos o manifieste opiniones a través de expresiones que atenten contra la dignidad de la persona, su fama y su propia estimación. Igualmente, y según ha sido previamente desarrollado, se baraja un sistema de responsabilidad objetiva sobre daños morales sufridos por el usuario receptor de las manifestaciones, teniéndose en cuenta para su valoración la difusión o audiencia medio en el que han tenido lugar las manifestaciones.

ii) El usuario que interactúa en la publicación

Estos serían los supuestos en los que seguidores del perfil de quien comete el ilícito, o usuarios de la misma red social, comentan en la publicación o la marcan con *me gusta* o *no me gusta*. Sobre los últimos, estos no tendrían responsabilidad en ningún caso en cuanto ni son los autores del mensaje, ni lo difunden, tan sólo sería una manifestación de conformidad o desacuerdo. En cuanto los primeros, no cabe atribuirles responsabilidad por el hecho de interactuar en una publicación, aunque en la misma se recojan manifestaciones contrarias al honor, pues ni son sus autores ni fomentan su publicidad, aunque tales comentarios sean una consecuencia de la visibilidad del medio y ejemplifiquen la difusión que se alcanza en las redes sociales. Ahora bien, el autor de un comentario en una publicación podrá ser considerado responsable cuando el mismo contenga expresiones que, independientemente del mensaje original que comenta, sean por sí mismas vulneradoras del derecho al honor del ofendido, respondiendo como autor por la vulneración al derecho al honor de sus propias manifestaciones.

iii) El usuario no autor que comparte la publicación

Dentro de este supuesto estaría la copia de noticias, enlaces de noticias o enlaces a blogs u otras plataformas, o la reproducción de mensajes de opinión por parte de un usuario de la red social, que no es su autor material, que se reflejan en su muro personal, fomentando con ello su alcance y difusión.

Uno de los problemas más habituales cuando nos referimos a la responsabilidad de un usuario por las manifestaciones o expresiones publicadas por un tercero y reproducidas en su perfil es el caso de los *retweets*<sup>143</sup>. Sobre la responsabilidad del usuario no autor de

---

<sup>143</sup> Un *tweet* es una publicación propia que se realiza en el perfil del usuario de la red social Twitter, un *retweet* es hacerse eco de dicha publicación, por lo que se le añade *.-re* para diferenciarlo del original, permitiendo con esta función que la opinión manifestada por una persona puedan verla los seguidores de quien *retwittea*, pudiendo estos no coincidir con los seguidores de quien publica el tweet original ni a quien



la publicación, pero de la que hace eco en su perfil por medio del *retuit* se han pronunciado algunos Tribunales, como en el caso de la SAP de Madrid núm. 467/2018 de 21 diciembre<sup>144</sup> sobre las expresiones «choni», «ridícula», «esperpento», «trilera», etc., publicadas en el perfil de *Twitter* de un periodista deportivo sobre la mujer de un futbolista. Aunque dichas expresiones no eran *retweets* sino *tweets* publicados por él mismo, el Tribunal argumenta que en el caso de que hubieran sido mensajes retuiteados y no originales, el hecho de retuitearlos para permitir que los seguidores del periodista deportivo pudieran verlos y tener conocimiento de los mismos, sin especificar con qué finalidad, y atendiendo al contenido de las expresiones que se están retuiteando, «significa que el demandado está conforme con lo que envía, haciéndose partícipe del contenido del RT<sup>145</sup>». Por lo que, en base a dicho planteamiento de la Audiencia, la responsabilidad por el contenido de los mensajes se extendería a quién los retuitea.

En el caso de la Sentencia núm. 213/2012 de 15 octubre del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona<sup>146</sup> se demanda a una concejala que publicó varios *Tweets* en los que acusaba a otra concejala, de partido contrario, de aprovecharse con fines partidistas del cáncer de pecho que sufría. Uno de esos *tweets* fue retuiteado por otro concejal, resultando ser codemandado en el procedimiento. En la valoración de las responsabilidades se distingue entre la concejala, que fue autora de cuatro *tweets* y no los eliminó con posterioridad y el concejal codemandado, que se hizo eco de uno de ellos y a los pocos minutos lo eliminó y se disculpó. Valorando la actuación del concejal como meramente puntual, sus disculpas y su rápida rectificación eliminándolo el mismo día, no se le atribuye responsabilidad, siendo declarada única responsable y obligada a indemnizar a la concejala actora por vulneración al su derecho al honor, la concejala autora de los cuatro *tweets*.

De la citada jurisprudencia se desprenden pocas dudas sobre la responsabilidad del autor de los *tweets* en cuanto sus manifestaciones sobrepasaban los límites de la libertad de expresión y eran frontalmente contrarias al derecho al honor de los actores y responden en base a la responsabilidad objetiva, no obstante, y pese a la objetivación de la

---

va dirigido. Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13ª) Sentencia núm. 467/2018 de 21 diciembre. (JUR 2019\78601), FJ 2.

<sup>144</sup> Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13ª) Sentencia núm. 467/2018 de 21 diciembre. (JUR 2019\78601).

<sup>145</sup> *Ibidem*, FJ 2.

<sup>146</sup> Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Pamplona (Provincia de Navarra) Sentencia núm. 213/2012 de 15 octubre. (AC 2012\1997).

responsabilidad que atribuye el artículo 9.3 de la LO 1/1982 y así ha declarado la jurisprudencia<sup>147</sup>, se observa una tendencia a la subjetivación de la responsabilidad en el caso de los usuarios que retuitean, ya que como exoneración de la responsabilidad se valora la voluntad, como en la SAP de Madrid núm. 467/2018 de 21 diciembre<sup>148</sup> que tendría en cuenta la finalidad por la que se retuitean los mensajes, y el arrepentimiento manifestado en la Sentencia núm. 213/2012 de 15 octubre del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona<sup>149</sup>.

Otro supuesto que nos podemos encontrar es cuando lo que se comparte es el enlace a una noticia cuyo contenido vulnera el derecho al honor del ofendido y que a su vez puede traer causa de reacciones y comentarios en las redes sociales por otros usuarios a raíz de esta.

Un caso ejemplificativo es el de la SAP de Madrid núm. 550/2016 de 31 octubre<sup>150</sup>, de sus hechos cabe destacar que el periódico «QUE.ES» publicó un artículo en el que acusaba a una concejala de solicitar que su ayuntamiento fuera auditado por el departamento en el que trabajaba su marido, siendo esta información declarada con posterioridad como incierta y tergiversada, faltando el deber de diligencia y veracidad que exige el derecho a la información. Con base en este artículo, el «Diario de Boadilla» publica la misma información. Como consecuencia de la publicación de estos artículos concejales de signo político distinto se hacen eco de la noticia del periódico «QUE.ES» por medio de *tweets* y *retweets* y publicaciones en sus muros de Facebook.

Sobre la responsabilidad de estos últimos por la difusión de la noticia en redes sociales, la Audiencia argumenta que quienes compartieron la noticia, sin realizar comentarios, lo hicieron en base a la relevancia de la información que había sido publicada y no consta que la información de la noticia «partiera maliciosamente elaborada por éstos<sup>151</sup>». No hay extensión de la responsabilidad cuando lo que se publica es una información emitida por

---

<sup>147</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencias núm. 312/2012 de 7 mayo. (RJ 2012\6111) y núm. 366/2010 de 15 junio. (RJ 2010\5151), Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 521/2016 de 21 julio. (RJ 2016\3430), Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 388/2015 de 29 junio. (RJ 2015\2660), Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 312/2014 de 5 junio. (RJ\2014\3087).

<sup>148</sup> Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13ª) Sentencia núm. 467/2018 de 21 diciembre. (JUR 2019\78601).

<sup>149</sup> Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Pamplona (Provincia de Navarra) Sentencia núm. 213/2012 de 15 octubre. (AC 2012\1997).

<sup>150</sup> Audiencia Provincial de Madrid (Sección 9ª) Sentencia núm. 550/2016 de 31 octubre. (JUR\2016\275896).

<sup>151</sup> *Ibidem*, FJ 6.

un medio de comunicación, aun cuando esta resulta ser falsa, pues el derecho a la información ejercido por el medio que realiza la publicación original queda supeditado a los requisitos de diligencia y veracidad<sup>152</sup>, los cuales no pueden ser aplicados a los usuarios de la red social que sólo se hacen eco de unos acontecimientos publicados que consideran de interés, siempre y cuando se evidencie que dicha información no ha sido elaborada intencionadamente por los mismos y desconocían su inexactitud.

Otro aspecto que trae problemática lo aborda la sentencia seguidamente, cuando como consecuencia del contenido de la publicación se realizan comentarios en las redes sociales. En estos supuestos, al entrar a valorar la confrontación del derecho al honor con el derecho a la libertad de expresión, puede ser declarado responsable aquel cuyos comentarios sobrepasen los límites de la libertad de expresión, cuando contengan insultos o vejaciones, ya que dichas manifestaciones serán, por sí mismas, vulneradoras del derecho al honor. Teniendo en cuenta este planteamiento, en la referida sentencia no se aprecia que los comentarios publicados por los contrincantes políticos supusieran vulneraciones al derecho al honor de la actora, valorándose a tal fin la situación de contienda política y el contexto de actualidad y controversia que en ese momento presentaban las cuentas del Ayuntamiento. Aunque los comentarios fuesen críticos y trajeran causa de una realidad errónea, que no en su totalidad falsa, no sobrepasaban los límites del derecho a la libertad de expresión.

Fuera de nuestras fronteras, el mayor exponente de esta problemática fue cuando la BBC publicó por error en un documental que Lord Alistair McAlpine había abusado de menores en los años setenta. Lord Alistair McAlpine no solo actuó contra la BBC, sino que demandó alrededor de un millar de cuentas que difundieron rumores o enlaces a páginas de bulos y otras 9.000 que retuitearon los originales. Además, solicitó una compensación simbólica a los titulares de cuentas de menos de 500 usuarios, que donaran 5 dólares a una ONG<sup>153</sup>.

---

<sup>152</sup> «En el ámbito de la libertad de expresión no rige el requisito de la veracidad, dado que su protección solo exige que el objeto de crítica y opinión sean cuestiones de interés o relevancia pública y que no se utilicen para su manifestación expresiones inequívocamente injuriosas.» Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 407/2014 de 9 julio. (RJ/2014/4410) FJ 3.

<sup>153</sup> Noticias publicadas en las versiones digitales de los periódicos «El País» <https://elpais.com/internacional/2014/02/05/actualidad/1391638412779847.html> y «The Guardian» <https://www.theguardian.com/media/2013/feb/21/lord-mcalpine-twitter-defamation-cases>, (consultados el 6 de enero de 2020).

iv) La responsabilidad del *Community Manager*

El *Community Manager*<sup>154</sup>, o gestor de comunicaciones, es quien gestiona las redes sociales de una empresa, en cuanto su responsabilidad por vulneración al derecho al honor de un usuario en redes por la cuenta que administra como gestor de comunicaciones de una empresa debemos distinguir si el mensaje es de su propia autoría o si ha sido encargado publicar por parte de la empresa.

En el primer supuesto, que fuera autor de la publicación, el *Community Manager* sería directamente responsable de lo publicado, no obstante, debe atenderse a la responsabilidad que en estos casos puede extenderse a la empresa para la cual realiza sus servicios en virtud del artículo 1903 del Código Civil, en cuanto serán también civilmente responsables «los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones».

En el caso de que el mensaje no fuera autoría del gestor de comunicaciones, sino que hubiese sido mandado a publicar por parte de la empresa, este no tendría responsabilidad con respecto a lo publicado ya que no sería el autor de las expresiones que atenten contra el derecho al honor del ofendido, ni las haya reproducido por voluntad propia, sino que actuó en el ejercicio de su profesión en base a un mandato, por lo que la responsabilidad recaería sobre la empresa.

---

<sup>154</sup> FUENTE, O., “Qué es un Community Manager y cuáles son sus principales funciones en la empresa”, «El *Community Manager* es el profesional responsable de construir y administrar la comunidad online y gestionar la identidad y la imagen de las marcas, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans en internet.» <https://www.iebschool.com/blog/que-es-un-community-manager-redes-sociales/> (consultado el 6 de enero de 2020).

## **6. CONCLUSIONES**

I.- Con el desarrollo de las redes sociales y el nacimiento de la personalidad virtual se extiende la personalidad del sujeto a su dimensión on-line lo que conlleva la necesaria protección de los derechos de la personalidad que en ella se desarrollan. Siendo las redes sociales medios de especial difusión y estando caracterizados por la constante comunicación e interacción entre usuarios, se exige una especial protección de los derechos que se puedan ver afectados, entre los que cabe destacar el derecho al honor, intimidad y propia imagen.

II.- En el presente estudio se ha tratado de exponer el conflicto dentro de las redes sociales del derecho al honor frente a los derechos a la libertad de expresión e información. En el debate de qué derecho prevalece, ante la falta de jerarquización de los derechos fundamentales, debe atenderse a los criterios de ponderación desarrollados en la jurisprudencia, estos son; el interés general de la información, la condición pública o privada del ofendido, la necesaria proporcionalidad de las opiniones y el contexto en el que se desarrollan. De su desarrollo y análisis se contextualiza el campo de acción de cada derecho, lo que permite asentar las bases de qué manifestaciones serán contrarias a los contenidos de los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información y supondrán vulneraciones al derecho al honor dentro de las redes sociales y cuya responsabilidad ha sido objeto de este estudio.

III.- Entrando en el estudio de los responsables debe diferenciarse entre el usuario de la red social y la red social en sí misma, ya que el régimen de responsabilidad aplicado a cada uno de ellos variará. Así la responsabilidad recogida en la LO 1/1982 sobre las vulneraciones al derecho al honor, intimidad y propia imagen sería aplicable a los usuarios de la red social, cuando consten como autores del contenido ilícito, y establece una responsabilidad de carácter objetivo. En base a este criterio si se constata la existencia de una vulneración al derecho al honor se presumen causados los daños morales, en cambio, no será aplicable esta objetivación de la responsabilidad cuando se trate de la apreciación de daños patrimoniales, los cuales deberán ser alegados y probados en el procedimiento.

Para hacer frente a las intromisiones, el artículo 9. 2 de la LO 1/1982 proclama la adopción de una serie de medidas encaminadas a resarcir en la medida de lo posible el daño causado. Entre estas medidas las más destacadas son la eliminación del contenido y la publicación de la sentencia con al menos la misma publicidad que tuvo la publicación origen del ilícito, sin embargo, en cuanto nos referimos a las redes sociales, cuyos contenidos son difundidos por sus usuarios, no puede asegurarse que se alcance el mismo nivel de difusión y conocimiento público que tuvo el ilícito, quedando restringida a la publicación en el perfil del usuario infractor sin poderse asegurar la difusión que pueda alcanzar. La publicación de la sentencia también podrá extenderse a su publicación en medios de comunicación que se hicieran eco del ilícito, por haber contribuido a su difusión.

IV.- En lo concerniente a la responsabilidad de las redes sociales, se entiende que las redes sociales son servicios de la sociedad de la información y en concreto, servicios de intermediación, por lo tanto, quedan sujetas a la Directiva 2000/31/CE sobre los servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico y a la Ley 34/2002, que transpone a nuestro ordenamiento dicha Directiva.

Sobre la responsabilidad que deberán hacer frente, está basada en el carácter subjetivo, no serán responsables siempre y en todo caso aun habiéndose constatado una vulneración al derecho al honor dentro de sus servicios. Las redes sociales, como prestadora de un servicio a la sociedad de la información, no están sometidas a una obligación general de supervisión de todos los contenidos que publican los usuarios, medida adecuada y proporcionada dado el alto número de usuarios que acumulan y contenidos que se publican. Sin embargo, su responsabilidad vendrá determinada por dos factores, la falta de conocimiento efectivo en la ilicitud de los contenidos almacenados o la falta de diligencia en su retirada de ser consciente del ilícito.

Frente a la falta de obligación de supervisión de los contenidos almacenados, la Ley 34/2002 expande el conocimiento efectivo cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud del contenido publicado y haya solicitado su retirada, o cuando en un procedimiento se haya constatado la lesión y la resolución haya sido comunicada al prestador, o por la aplicación de procedimientos de detección y retirada aplicados por los propios prestadores voluntariamente, u otros métodos de conocimiento efectivo que pudieran declararse.

La jurisprudencia debate el alcance de los otros medios de conocimiento efectivo al que se refiere la normativa española. Si bien no han tenido lugar pronunciamientos sobre este aspecto relacionado con la responsabilidad de las redes sociales, se han dado sobre la responsabilidad de otros servicios de intermediación, de los cuales se desprende que el conocimiento efectivo se extiende cuando la ilicitud de los datos almacenados es patente por sí misma, cuando se impide y dificulta la comunicación del usuario afectado con el responsable del servicio, o cuando los sistemas de control o moderación puestos a disposición por el prestador actúan de forma ineficiente. La extensión de la responsabilidad por conocimiento efectivo tendrá lugar en aquellos supuestos en los que de haber actuado el prestador de servicios con la diligencia suficiente hubiera podido alcanzar dicho conocimiento, bien por sus propios medios, bien por la comunicación fehaciente del tercero afectado.

V.- De la normativa desarrollada sobre la regulación del régimen de responsabilidad, cabe destacar cuando nos referimos a los usuarios como responsables, que la LO 1/1982 sobre la protección civil al derecho al honor, a la intimidad y propia imagen, por la falta de concreción de su articulado y la evolución tecnológica y social que se ha experimentado desde su publicación le impiden adaptarse a los problemas que en la actualidad presentan las vulneraciones de estos derechos en la era digital. Misma conclusión se desprende del desarrollo en este estudio sobre la responsabilidad de la red social, como servicio a la sociedad de la información y servicio de intermediación, regulada en la Directiva 2000/31/CE y en la Ley 34/2002, las cuales agrupan en un escaso articulado la responsabilidad de los distintos tipos de servicios de intermediación, sin olvidar que dentro de cada categoría cada servicio cuenta con sus propias particularidades al igual que cada red social presenta las suyas, lo que exige un continuo desarrollo jurisprudencial que adapte sus deficiencias y generalidades a los casos particulares.

Por tanto, tras analizar ambos sistemas normativos aplicables a la valoración de la responsabilidad civil dentro de las redes sociales, se concluye que ambos están obsoletos e incompletos, lo que genera, en mi opinión, no la necesidad de una reforma legislativa, sino de una regulación propia en materia de responsabilidad civil en redes sociales, a nivel Europeo y nacional, que aporte seguridad jurídica y haga frente de forma efectiva a las vulneraciones a los derechos de la personalidad que día a día tienen lugar en las redes sociales.

## 7. BIBLIOGRAFÍA

### Monografías

BECCARIA, C y VOLTAIRE: *De los delitos y las penas*, traducción de J.A. de las Casas, Alianza Editorial, Madrid, 1968.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ y RODRÍGUEZ-CANO, R: *Manual De Derecho Civil. Derecho Privado Y Derecho De La Persona.*, 7ª ed., Bercal, Madrid, 2017.

BONILLA SÁNCHEZ, J. J: *Personas y derechos de la personalidad*, Colección Jurídica General, Madrid, Reus S.A., 2010.

CAVANILLAS MÚGICA, S. [et Al.]: *Responsabilidades De Los Proveedores De Información En Internet*, Biblioteca Comares De Ciencia Jurídica Derecho De La Sociedad De La Información, Dykinson, Madrid, 2007.

CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L: *Honor, intimidad e imagen*, Bosch, Barcelona, 1996.

DÍEZ-PICAZO, L. M: *Sistema de derechos fundamentales*, 4ª ed. Derechos Fundamentales Y Libertades Públicas. Cizur Menor: Civitas, Navarra, 2013.

ENCABO VERA, M. A: *Derechos de la Personalidad*, Madrid, Marcial Pons, 2012.

LÓPEZ JACOISTE, J.J: *Intimidad, honor e imagen ante la responsabilidad civil*, en Homenaje a J.B. Vallet de Goytisolo, Vol. IV, Madrid, 1989.

MARTÍN CASALS, M: *Notas sobre la indemnización del daño moral en las acciones por difamación de la LO 1/1982*, en Centenario del Código Civil: (1889-1989), Centro de Estudios Ramón Areces, D.L. Tomo II, Madrid, 1990, pp. 1231-1274.

MORALES VIALES, R; Y UGARTE IBARRA, R: *Tutela de los derechos de la personalidad virtual y protección de datos de carácter personal en las redes sociales online*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, 2012.



O'CALLAGHAN, X: *Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen*. EDERSA, Madrid, 1991.

OLIVEROS LAPUERTA, M. V: *Estudios sobre la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen*, España Presidencia Del Gobierno Cuadernos De Documentación, Presidencia Del Gobierno, Secretaría General Técnica, Subdirección General De Documentación, Madrid, 1980.

REGLERO CAMPOS, F, ÁLVAREZ LATA, N: *Lecciones De Responsabilidad Civil*., José Manuel Busto Lago y Fernando Reglero Campos (coordinadores); Natalia Álvarez Lata ... [et Al.], 2ª ed., Colección Manuales Aranzadi. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2013.

VELA SÁNCHEZ, J.A: *Los Derechos de la Personalidad*, Derecho Civil para el Grado I, Dykinson, Madrid, 2013.

### **Artículos**

ADAMIC, L. y ADAR, E., “How to search a social network”, en *Social Networks*, 27(3), 2005, pp. 187- 203.

BOID, D. M. y ELLISON, N. B., “Social network sites: Definition, history, and scholarship.” en *Journal of Computer-Mediated Communication*, Volume 13, Issue 1, 2007, pp. 210-230.

BUSTO LAGO, J. M., “La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de intermediación en la sociedad de la información”, en *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 54, Aranzadi, Pamplona, 2002, pp. 1-6.

CLIMENT GALLART, J.A., “El estatuto jurídico del honor en el Convenio Europeo de Derechos Humanos: de una restricción legítima de la libertad de expresión a un derecho humano autónomo” en *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 4, febrero 2016, pp. 29-58.

LÓPEZ DE LA PEÑA SALDÍAS. J.F., “Libertad de expresión e internet. Responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. El caso “putasgae”, en *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 3/2010, Aranzadi, Pamplona, 2010, pp. 19-28.

MAIZA OZCOIDI, C., “La definición del concepto del honor. Su entidad como objeto de investigación histórica”, en *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie IV, Hª Moderna, t. 8, 1995, pp. 191-210.

PEGUERA POCH, M., “«Sólo sé que no sé nada (efectivamente)»: la apreciación del conocimiento efectivo y otros problemas en la aplicación judicial de la LSSI”, en *IDP: Revista de Internet, Derecho y Política*, nº 5, 2007, pp. 2-18.

RUBÍ PUIG, A., “Derecho al honor online y responsabilidad civil del ISPs”, en *InDret, Revista para el Análisis del Derecho*, *InDret* 4/2010, Barcelona, 2010, pp. 1-20.

RYSZARD KOSMIDER, M., “El contenido jurídico del concepto del libre desarrollo de la personalidad con referencia especial a los sistemas constitucionales alemán y español”, en *Revista de Derecho UNED*, núm. 23, 2018, pp. 667-706.

SANTA CRUZ TEJEIDO, J y D’ORS A., “A propósito de los Edictos Especiales «de iniuriis»” En *Dianlet*, 1979, pp. 653-660.

SOLER PRESAS, A., “Am I in Facebook?”, en *InDret revista para el análisis del derecho*, en *InDret* 3/2011, 2011, pp. 1-44.

BALMACEDA ERRAZURIZ. C., “Virtus Romana en el siglo I a.C.”, En *Dianlet*, Vol. 25, Nº 1, 2007, p. 285-304.

### **Capítulos de libro**

ATIENZA NAVARRO, M.L: “Capítulo IX. La responsabilidad civil por los daños producidos por las intromisiones ilegítimas en el derecho al honor”, en *Derecho al Honor*:

*Tutela Constitucional, Responsabilidad Civil y Otras Cuestiones*, Aranzadi, Pamplona, 2015.

PEGUERA POCH, M: “Capítulo V. El sistema de exclusiones de responsabilidad en la Directiva sobre el comercio electrónico y en la Ley de servicios a la sociedad de la información”, en *La exclusión de la responsabilidad de los intermediarios de Internet*, Biblioteca Comares De Ciencia Jurídica Derecho De La Sociedad De La Información, Dykinson, Madrid, 2007, pp. 205- 345.

### **Páginas web**

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Sinopsis del artículo 26 CE del Congreso de los Diputados”, <https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?Art=26&tipo=2> (consultado el 7 de octubre de 2019).

EL PAÍS: [https://elpais.com/internacional/2014/02/05/actualidad/13916384\\_12779847.html](https://elpais.com/internacional/2014/02/05/actualidad/13916384_12779847.html) (consultado el 6 de enero de 2020).

FACEBOOK: <https://es-es.facebook.com/legal/terms> (consultado el 10 de enero de 2020) y <https://es-es.facebook.com/privacy/explanation> (consultado el 29 de octubre de 2019).

FUENTE, O: “Qué es un Community Manager y cuáles son sus principales funciones en la empresa”, <https://www.iebschool.com/blog/que-es-un-community-manager-redes-sociales/> (consultado el 6 de enero de 2020).

HOOTSUITE Y WE ARE SOCIAL, “Informe Digital 2019 reports”, <https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates> (consultado el 3 de diciembre de 2019).

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: <https://dej.rae.es/lema/red-social> (consultado el 1 de octubre de 2019).

THE GUARDIAN: <https://www.theguardian.com/media/2013/feb/21/lord-mcalpine-twitter-defamation-cases>, (consultado el 6 de enero de 2020).

TWITTER: <https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-rules>, <https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/enforcement-options> (Consultadas el 5 de noviembre de 2019) y <https://twitter.com/es/tos> (Consultado el 20 de enero de 2020).

URUEÑA, A (coord.), FERRARI, A., BLANCO, D., VALDECASA, E: *Las redes sociales en internet*, Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), 2011, [https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos\\_ficha.aspx?id=3614](https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=3614) (consultado el 1 de octubre de 2019).

## **8. ANEXO JURISPRUDENCIAL**

### **TRIBUNAL EUROPEO DE RECHOS HUMANOS**

Caso Fuentes Bobo contra España. Sentencia de 29 febrero 2000. (TEDH 2000\90).

Caso De Diego Nafría contra España. Sentencia de 14 marzo 2002. (TEDH 2002\15).

Caso Ashby Donald y otros contra Francia. Sentencia de 10 enero 2013. (TEDH 2013\7).

Caso Ernest August Von Hannover contra Alemania. Sentencia de 19 febrero 2015. (TEDH 2015\26).

Caso Bédat contra Suiza. Sentencia de 29 marzo 2016. (JUR 2016\63824).

Caso Jiménez Losantos contra España. Sentencia de 14 junio 2016. (TEDH 2016\51).

Caso Ergüdoğan contra Turquía. Sentencia de 17 abril 2018. (TEDH 2018\40).

### **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA**

Caso Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) contra Netlog NV, Sentencia de 26 de febrero de 2012 (TJCE 2012\27).

### **TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 53/1985 de 11 abril. (RTC 1985\53).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 6/1988 de 21 enero. (RTC 1988, 6).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 105/1990 de 6 junio. (RTC 1990, 105).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 171/1990 de 12 noviembre. (RTC 1990, 171).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 197/1991 de 17 octubre. (RTC 1991, 197).

Tribunal Constitucional (Sala Segunda) Sentencia núm. 85/1992 de 8 junio. (RTC1992, 85).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 223/1992 de 14 de diciembre. (RTC 1992\223).

Tribunal Constitucional (Sala Segunda) Sentencia núm. 240/1992 de 21 diciembre. (RTC 1992, 240).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 170/1994 de 7 junio. (RTC\1994\170).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 76/1995 de 22 de mayo. (RTC 1995\76).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 139/1995 de 26 septiembre. (RTC 1995\139).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 134/1999 de 15 julio. (RTC\1999\134).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 187/1999 de 25 octubre. (RTC\1999\187).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 6/2000 de 17 de enero. (RTC 2000, 6).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 115/2000 de 5 mayo. (RTC 2000\115).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 49/2001 de 26 de febrero. (RTC 2001, 49).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 204/2001 de 15 de octubre. (RTC 2001, 204).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 99/2002 de 6 mayo. (RTC\2002\99).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 14/2003, de 28 de enero. (RTC 2003, 14).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 1/2005 de 17 enero. (RTC 2005, 1).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 9/2007 de 15 de enero. (RTC 2007, 9).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 139/2007 de 4 junio. (RTC 2007, 139).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 244/2007, de 10 de diciembre. (RTC 2007, 244).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 56/2008 de 14 abril. (RTC 2008\56).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 29/2009 de 26 enero. (RTC 2009, 29).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 77/2009 de 23 marzo. (RTC 2009\77).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 12/2012 de 30 enero. (RTC 2012\12).

Tribunal Constitucional (Pleno) Sentencia núm. 216/2013 de 19 diciembre. (RTC 2013, 216).

Tribunal Constitucional (Pleno) Sentencia núm. 58/2018 de 4 junio. (RTC 2018\58).

Tribunal Constitucional (Pleno) Sentencia núm. 133/2018 de 13 diciembre. (RTC 2018\133).

Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 25/2019 de 28 febrero. (RTC 2019\25).

## **TRIBUNAL SUPREMO**

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia 1 de julio de 1992 (RJ 1992\6499).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 302/1993 de 23 de marzo. (RJ 1993\2543).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 1021/1995 de 25 de noviembre. (RJ 1995\8716).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 1270/1998 de 31 de diciembre. (RJ 1998\9771).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 533/2000 de 31 mayo. (RJ\2000\5089).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 872/2008 de 25 septiembre. (RJ\2008\5573).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 94/2009 de 25 febrero. (RJ\2009\1515).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 773/2009 de 9 diciembre. (RJ\2010\131).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 366/2010 de 15 junio. (RJ 2010\5151).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 314/2010 de 4 de diciembre. (RJ 2010\3699).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 72/2011 de 10 febrero. (RJ\2011\313).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 117/2011 de 3 marzo (RJ\2011\2626).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencias núm. 386/2011 de 12 de diciembre (RJ 2012, 35).



Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 605/2011 de 20 julio. (RJ\2011\6137).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 904/2011 de 30 de noviembre. (RJ 2012\1642).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 312/2012 de 7 mayo. (RJ 2012\6111).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 128/2013 de 26 febrero. (RJ\2013\2580),

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 176/2014 de 24 marzo. (RJ 2014\1752).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 435/2014 de 17 de julio. (RJ 2014, 4428).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 79/2014 de 28 de mayo. (BOE-A-2014-6653).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 312/2014 de 5 junio. (RJ\2014\3087).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 407/2014 de 9 julio. (RJ\2014\4410).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno) Sentencia núm. 435/2014 de 17 de julio. (RJ 2014, 4428).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno) Sentencia núm. 666/2014 de 27 de noviembre. (RJ 2014, 6031).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 696/2014 de 4 de diciembre. (RJ 2014, 6360).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 29/2015 de 2 de febrero. (RJ 2015, 488).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 123/2015 de 4 de marzo. (RJ 2015, 1095).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 232/2016 de 8 de abril. (RJ 2016\3657).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 337/2016 de 20 de mayo. (RJ 2016\3673).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 386/2016 de 7 de junio. (RJ 2016, 2343).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 388/2015 de 29 junio. (RJ 2015\2660).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 425/2015, de 8 de julio. (RJ 2015, 2774).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 521/2016 de 21 julio (RJ\2016\3430).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 587/2016 de 4 de octubre. (RJ 2016, 4729).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 588/2016 de 4 de octubre. (RJ 2016, 4775).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 613/2016, de 7 de octubre.

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 618/2016 de 10 de octubre. (RJ 2016\4967).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 362/2016 de 1 de junio. (RJ 2016, 2323).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 50/2017 de 27 enero. (RJ\2017\369).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 261/2017 de 26 de abril. (RJ 2017, 1737).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 426/2017 de 6 julio. (RJ 2017\3194).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 450/2017 de 13 julio. (RJ 2017\3623).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno) Sentencia núm. 551/2017 de 11 octubre. (RJ\2017\4283).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 338/2018 de 6 junio. (RJ 2018\2408).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno) Sentencia núm. 476/2018 de 20 julio. (RJ\2018\2832).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 201/2019 de 3 abril. (RJ\2019\1214).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 236/2019 de 23 abril. (RJ\2019\1376).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 372/2019 de 27 junio. (RJ 2019\2632).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 480/2019 de 20 de septiembre. (ECLI: ES:TS:2019:2975).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 641/2019 de 26 noviembre. (RJ 2019\4968).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 689/2019 de 18 de diciembre. (VLEX-834927177).

## **AUDIENCIAS PROVINCIALES**

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 8ª) Sentencia núm. 468/2010 de 8 noviembre. (AC\2010\2096).

Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) Sentencia núm. 707/2010 de 29 noviembre. (AC\2011\14).

Audiencia Provincial de Valencia (Sección 6ª) Sentencia núm. 338/2014 de 5 diciembre. (AC\2015\633).

Audiencia Provincial de Málaga (Sección 7ª, Melilla) Sentencia núm. 33/2015 de 9 junio. (AC 2015\115).

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª) Sentencia núm. 339/2015 de 21 octubre. (JUR\2015\306133).

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 9ª) Sentencia núm. 550/2016 de 31 octubre. (JUR\2016\275896).

Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 3ª) Sentencia núm. 390/2017 de 17 noviembre. (AC\2017\1926).

Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16ª) Sentencia núm. 685/2017 de 27 diciembre. (AC\2017\1702181).

Audiencia Provincial de Segovia (Sección 1ª) Sentencia núm. 59/2018 de 8 marzo. (AC\2018\).

Audiencia Provincial de Málaga (Sección 4ª) Sentencia núm. 200/2018 de 28 marzo. (JUR 2018\187513).

Audiencia Provincial de Asturias (Sección 6ª) Sentencia núm. 229/2018 de 1 junio. (AC 2018\1282).

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13ª) Sentencia núm. 467/2018 de 21 diciembre. (JUR 2019\78601).

## **JUZGADO PRIMERA INSTANCIA**

Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Pamplona (Provincia de Navarra) Sentencia núm. 213/2012 de 15 octubre. (AC 2012\1997).